



FLACSO
MÉXICO

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES SEDE ACADÉMICA MÉXICO

**DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES VI PROMOCIÓN
VI PROMOCIÓN**

2006 - 2009

**El Partidismo Racional
Desempeño de Gobierno e Intercambio Particularizado en
La Construcción del Perredismo en la Ciudad de México: 2001 – 2006**

Tesis Presentada para obtener el título de
Doctor en Investigación en Ciencias Sociales con Mención en Ciencia
Política de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Sede Académica de México
Por
Carlos Luis Sánchez y Sánchez

Director de Tesis
Dr. Alejandro Moreno Álvarez
Seminario de Tesis: Procesos Políticos
México D.F. Septiembre del 2009

Se agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) el apoyo para la realización de este trabajo de investigación, a través de los programas: “Becas para estudios en Instituciones Inscritas en el Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional”, y “Programa de Becas Mixtas para Estancias de Investigación en el Extranjero”

Resumen

Esta tesis abona en la discusión acerca de los mecanismos causales que determinan la formación del partidismo en el contexto de una democracia emergente. A partir de la expansión sin precedentes que observó en sus niveles de identificación política el Partido de la Revolución Democrática, durante su segundo periodo de gobierno en la Ciudad de México de los años 2001 al 2006, en este trabajo se pretende ofrecer la evidencia necesaria que sustente una explicación en torno a lo que determino a nivel agregado e individual la identificación mayoritaria con el denominado Perredismo en la Ciudad de México. En este sentido, la noción de partidismo racional que aquí se emplea, sienta sus bases en la premisa teórica que asume que la formación de las identidades político partidarias también conlleva un proceso de carácter exógeno, articulado en torno a la capacidad de los individuos para evaluar y decidir sus preferencias políticas; en donde el partidismo, en este caso, es una función del impacto que tiene el desempeño de los partidos en el gobierno. Se postula que la expansión del Perredismo no hubiera sido posible sin conformación de nuevos vínculos partidistas basados en una estrategia de acumulación política; fincada principalmente en un desempeño de gobierno, sustentado en la implementación de políticas sociales que redistribuyeron de forma particularista distintos recursos públicos. Por otro lado, se sostiene que esta estrategia de gobierno produjo nuevos marcos de identificación mutua que cohesionaron a grupos de individuos heterogéneos entre sí: Jóvenes, niños, ancianos, mujeres, discapacitados, desempleados, en torno a un común denominador compartido de marginación y pobreza.

Abstract

This thesis contributes to the debate about the causal mechanisms that determine the formation of partisanship in the context of an emerging democracy. Following the unprecedented expansion observed in the levels of party political identification of the Democratic Revolution Party during his second term in Mexico City in the period 2001 - 2006, this work aims to provide the evidence to support an explanation about partisanship in aggregate and individual level.

The notion of rational partisanship used here, is based in theoretical premise that assumes that the formation of partisanship involves a exogenous process, which focused on ability of individuals to assess and decide their political preferences, hence the party identification is a function of the performance of parties in government.

In this sense, the expansion of the so-called *Perredismo* would not have been possible without forming new ties based on partisan political accumulation strategy based on the implementation of social policies of particularistic nature. On the other hand, this strategy has produced new frameworks of mutual identification that binds heterogeneous groups: young people, children, elderly, women, disabled, unemployed, around a shared common denominator of marginalization and poverty

Índice

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Introducción..... | 1 |
| Capítulo I. Los Modelos de Explicación de la Formación del Partidismo..... | 30 |
| 1. Los Clivajes o Líneas Divisorias como fundamento de las preferencias partidistas..... | 31 |
| 2. El Modelo Michigan..... | 38 |
| 3. Racionalidad, Desempeño y Partidismo..... | 45 |
| 4. Partidismo Racional, Ejercicio de Gobierno y Representación Política..... | 53 |
| 4.1 La Dimensión de la Receptividad de la Representación Programática..... | 58 |
| 4.2 La Dimensión de la Rendición de Cuentas..... | 61 |
| 5. Clientelismo, Intercambio Particularizado ó Patronazgo: La Formación del Partidismo en Democracias emergentes | 64 |
| Capítulo II. La Política Social Como Estrategia de Gobierno ó Por el Bien de Todos, Primero los Pobres: Desempeño de gobierno y Representación Clientelar en la Construcción del Partidismo | 76 |
| 1. La Identidad Partidista en la Ciudad de México 2000 – 2006 | 78 |
| 2. El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2001 – 2006: La Denuncia del Modelo Neoliberal..... | 92 |
| 3. Receptividad y Agregación de Demandas en la Política Social del Gobierno del Distrito Federal: El Programa Integral y Territorial de Desarrollo Social..... | 105 |
| 4. La Distribución del Gasto Social: La Prioridad en los Apoyos Directos o las Transferencias de Renta Individual..... | 114 |
| 5. La influencia Partidista en la Dinámica de Gasto: ¿Marginación ó Elección?..... | 121 |
| 6. La Dinámica de Gasto y el Perredismo en la Ciudad de México..... | 131 |
| 6.1 Datos y Estrategia de Análisis..... | 137 |
| 6.2 Las Variables..... | 139 |
| 6.3 Interpretación y Resultados..... | 140 |
| 6.4 El Perredismo por Delegación..... | 146 |
| 7 La Estrategia de Vinculación de la Política Social..... | 155 |
| 7.1 Gasto social, Beneficiarios, Asambleas y el Perredismo por Delegación..... | 173 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Capítulo III. Intercambio Particularizado y Evaluación Retrospectiva: La dimensión individual del Partidismo en la Ciudad de México 2000 – 2006..... | 176 |
| 1. Cambios en la Identificación Partidista 2000 – 2006: ¿Realineamiento por Rotación?..... | 179 |
| 2. Los cambios en la composición del Partidismo: Un primero acercamiento..... | 184 |
| 2.1 Cambios en la composición social..... | 184 |
| 2.2 Cambios en la composición política..... | 198 |
| 3. Partidismo, perredismo y Programas sociales..... | 212 |
| 4. Determinantes de la Identificación Partidista de los votantes de la Ciudad de México en el año 2000 y 2006..... | 218 |
| 4.1 Los determinantes del Perredismo 2000 – 2006..... | 220 |
| 4.2 Determinantes sociales e ideológicos del Partidismo 2006: el Perredismo en Perspectiva | 222 |
| 4.3 Las probabilidades promedio la elección del 2000 y 2006: Una comparación..... | 229 |
| 4.4 El realineamiento por rotación..... | 242 |
| 5. El beneficio de los programas sociales: El perredismo como condición distintiva en el proceso electoral del 2 de julio del 2006 en la Ciudad de México..... | 247 |
| | |
| Capítulo IV. Partidismo Ideológico y Partidismo Racional: La composición del Perredismo..... | 260 |
| 1. El eje liberal - conservador, como fundamento de la oposición ideológica izquierda/derecha... | 265 |
| 2. Dimensión ideológica y preferencias partidarias en México..... | 266 |
| 3. Estabilidad y consistencia ideológica en el perredismo en la Ciudad de México..... | 271 |
| 4. El espíritu conservador del perredismo en materia económica: El Perredismo de derecha y las transferencias de renta..... | 299 |
| | |
| Conclusiones..... | 309 |
| | |
| Bibliografía..... | 316 |
| | |
| Anexos..... | 336 |

A la memoria de María de Lourdes Sánchez Pacheco

Y

Laura Rita Sánchez Pacheco

*Out here in the fields
I fight for my meals
I get my back into my living.*

*I don't need to fight
to prove I'm right
I don't need to be forgiven.*

Pete Townshend

Agradecimientos

Quiero agradecer en primera instancia al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a mi escuela la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica México, por brindarme las condiciones académicas y materiales necesarias para llevar a cabo mis estudios de Doctorado durante estos tres años.

Al respecto quiero destacar el apoyo de la Directora de la FLACSO sede México, la Mtra. Giovanna Valenti Nigrini; de la Secretaria Académica la Dra. Gloria del Castillo Alemán y de la Coordinadora del Doctorado la Dra. Karina Ansolabehere Sesti quienes se interesaron siempre por el adecuado desarrollo de esta investigación; lo cual se tradujo en el impulso para llevar a cabo dos estancias de investigación, primero en la Universidad de Minnesota, auspiciada por esta institución, y posteriormente en la Universidad *Pompeau Fabra* en Barcelona, España, solventada con fondos del CONACYT.

Destaco el interés determinante del Mtro. Garth Willis, que en el marco del convenio de colaboración firmado por la FLACSO y la University of Minnesota, hizo posible mi presencia en Twin Cities.

Agradezco a mi director de tesis, el Dr. Alejandro Moreno Álvarez, por aceptar dirigir este trabajo y alentar su realización desde un principio, por reorientar sus objetivos iniciales y por el entusiasmo que en todo momento mostró con una investigación que se caracterizó por un alto grado de autonomía y al mismo tiempo de un seguimiento puntual de su parte en cada una de sus etapas. Sin duda tuve la oportunidad de trabajar con uno de los principales expertos en comportamiento electoral de América Latina, meta profesional que me impuse desde aquel 2003 en que leí por primera vez *El Votante Mexicano*. Gracias Alejandro.

En este sentido, agradezco al Dr. Benjamin Temkin titular del Seminario de Investigación en Procesos Políticos, por haber concretado la posibilidad de que Alejandro dirigiera este trabajo.

De igual forma, le doy las gracias a mis lectores a la Dra. Irma Méndez de Hoyos y al Dr. José Luis Velasco, por interesarse en este trabajo, por sus comentarios que sin duda lo enriquecieron y ayudaron a mejorarlo sustancialmente. Mención especial merece el Dr. Velasco cuyo compromiso académico y calidad humana merecen todo mi reconocimiento; de las múltiples experiencias académicas que tuve en la FLACSO, su cátedra sin duda fue de las más importantes y significativas, lo cual se ratifico posteriormente en la retroalimentación que tuve discutiendo con él este trabajo.

Por otra parte, agradezco al Dr. Diego Reynoso por la confianza que tuvo en mi persona en aquel aciago y oscuro 2005; cuando me invitó a postular a uno de los programas de posgrado del mejor nivel en México y América Latina. Gracias a Diego por su amistad e interés en mi persona, incluso desde mucho tiempo antes de mi ingreso a la FLACSO.

Por otra parte, agradezco al Dr. Ignacio Lago Peñas, que en Barcelona le dio un impulso decisivo a este trabajo; de igual manera mi gratitud al Dr. Rubén Hernández Cid por sus valiosas recomendaciones para el manejo y elaboración de los modelos estadísticos que aquí se presentan, muchas gracias Doctor.

De igual manera gracias al Mtro. Gabriel Noguez Rivero, con quien pude discutir las líneas principales de este trabajo en un marco de amistad y profesionalismo a toda prueba. A Rubén Torres Martínez que desde Francia da muestra de un trabajo de calidad y

excelencia académica. A David Torres Yáñez, cuya asistencia y amistad fueron de suma importancia para la realización de este trabajo.

Quiero mencionar a las personas que me acompañaron en este viaje, con los cuales discutí y compartí vivencias, experiencias previas y que, en todo momento, me brindaron su amistad y calidez humana. En primer lugar a Alex Caldera Ortega; si alguien con su amistad y sapiencia hizo muchas veces llevadera la presión propia de un posgrado como el de FLACSO fue Alex, cuya inteligencia y sobre todo nobleza lo hacen y lo harán trascender como persona en todo momento. A Georgina Caire, mi amiga, por tu cariño y amistad constante. A Silvio Gramajo por tu perspicacia y filo, por hacer evidente lo que permanece oculto y a Rubén Oliver Espinosa y a Eduardo Martínez por el frente común compartido, por su amistad y compañerismo.

A las personas que hacen posible que toda investigación fluya que me (nos) soportaron, apoyan y se preocupan por que todo funcione adecuadamente: Patricia Rangel Hernández, "Paty", Ma. Guadalupe Alvarado Mata y Hugo Octavio Luna Almazán, los bibliotecarios de la FLACSO, cuya presencia y profesionalismo me hacían recordar constantemente a su colega: Mi madre.

A Cristian Bravo Soria, con quien siempre pude compartir un momento de descanso hablando sobre nuestra pasión en común: La música. Gracias Cristian. Así como a todas las personas cuyo lugar de trabajo y reunión era la sección de Fotocopias de la FLACSO, crisol de emociones sin duda alguna.

En mi familia agradezco a mi Padre, Carlos Sánchez Tapia, por creer en mí, por preocuparse en todo momento por mi desarrollo profesional y académico y por ser una fuente inagotable de apoyo y fortaleza durante todos estos años y un ejemplo constante de carácter y entereza ante la adversidad. Gracias por todo papá. A Zaine, mi hermana, por tu cariño incondicional, por tu apoyo y comprensión; por preocuparte siempre que este trabajo saliera con bien y por brindarme una visión de mayor sensibilidad y agudeza en los momentos de tensión y decisión.

A Esperanza Pacheco Hernández, a Laura Rita, Guadalupe, Silvia, Socorro y Clemencia Sánchez Pacheco: mis raíces; por mostrarme junto con mi madre quien soy y la fuerza de unos orígenes vinculados a las personas que han luchado por este país.

Finalmente quiero dedicar esta tesis a todo aquel que como yo, inició la construcción de este camino a veces sólo con lo más indispensable en términos materiales; a aquel individuo que transita y "habita" pero que ante todo ESTUDIA en las instituciones públicas de educación superior de nuestro país.

Introducción

El 2 de julio del 2006 el Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezó la Coalición electoral por el Bien de Todos¹ (CPBT) y obtuvo su más alta votación hasta el momento en una elección Presidencial desde su primera participación, como agrupación política en este tipo de elecciones en 1994. De esta forma, del año 2000 al 2006 el PRD avanzó en su votación pasando de un 16.54% a un 36.09%. Es decir, con Andrés Manuel López Obrador como su candidato presidencial la votación del Partido de la Revolución Democrática se incrementó en 118%.

Además de alcanzar la votación más alta desde 1988², que lo colocó en la antesala del Poder Ejecutivo Federal, el partido refrendó por tercera vez consecutiva la titularidad de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

De esta forma, el Partido de la Revolución Democrática no sólo obtenía un triunfo total en la capital del país, sino que lo hizo con una ventaja de su más cercano competidor el Partido Acción Nacional (PAN), de poco más de 30 puntos porcentuales en la elección presidencial³ y de 19 puntos porcentuales en la elección de Jefe de Gobierno⁴.

Sin embargo, seis años antes, la realidad del PRD era diametralmente opuesta. Descontando que se ubicó en la elección presidencial en un lejano tercer sitio en las preferencias electorales (casi 26 puntos por debajo de la entonces denominada Alianza por el Cambio⁵), en la capital del país el electorado lo ratificaba de nueva

¹ La coalición estuvo integrada además del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por el Partido del Trabajo (PT) y el partido político Convergencia por la Democracia

² El PRD superó incluso el porcentaje de votación que su antecesor inmediato, el Frente Democrático Nacional (FDN) consiguió en 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato presidencial.

El Frente Democrático Nacional, integrado por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), el Partido Popular Socialista (PPS), el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) y el Partido Mexicano Socialista (PMS), siendo éste último el que cedió el registro al PRD para su constitución formal el 26 de mayo de 1989, obtuvo el 30.59% de la votación emitida en el país, seis puntos debajo de lo conseguido 18 años después.

³ Esto contrasta con la distancia que hubo entre estos dos partidos en la contienda presidencial que fue de poco más de medio punto porcentual 0.58%, estrecho margen que inclinó la balanza a favor de Acción Nacional que con el 36.69% de los votos accedió a un segundo período presidencial.

⁴ La distancia con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue abismal; en la elección presidencial fue de 50 puntos porcentuales y en la elección local de 25 puntos porcentuales.

⁵ Integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

cuenta en la Jefatura de Gobierno con apenas 5 puntos de ventaja respecto de la coalición panista.

En un período de seis años, el PRD lograba superar una condición de fragilidad repuntando hacia una posición dominante principalmente en el sistema de partidos local, lo cual se vio reflejado no sólo en los resultados de los comicios, sino fundamentalmente en el crecimiento en sus niveles de identificación partidista a nivel nacional⁶ pero sobre todo en la Ciudad de México.

En este sentido, con base en datos de dos distintos tipos de mediciones, el avance del perredismo fue en promedio de 20 puntos porcentuales. Por un lado, las encuestas de salida realizadas a votantes en las elecciones de Jefe de Gobierno en el 2000 y 2006 registran que el perredismo pasó del 25.1% al 43.4%. Por su parte las encuestas aplicadas a la población en general, en cada una de las dieciséis delegaciones políticas en que se encuentra dividida la Ciudad de México, muestran que en el año 2000 la identificación política con el PRD estaba en promedio en 17% mientras que en 2006 el índice fue del 38%⁷. En suma, si se toman como base las dos encuestas de salida de un momento electoral a otro a la tasa de crecimiento promedio del perredismo fue del 73%; mientras que a lo largo del tiempo en las distintas delegaciones políticas, el crecimiento promedio que el perredismo registró año con año del 2000 al 2006 fue del 4%⁸.

De esta manera, a partir de la expansión sin precedentes que se suscitó en los niveles de identificación política con el Partido de la Revolución Democrática, durante su segundo período de gobierno del 2000 al 2006 en la Ciudad de México, el propósito de esta tesis es ofrecer una explicación respecto a lo que determinó a

⁶ Entre 2000 y 2006 el PRI y el PAN descendieron en sus niveles de identificación partidista de un proceso electoral a otro, el primero de 32% paso a 21% mientras que el panismo descendió en un punto porcentual de 26% a 25%, sólo el PRD aumento en seis puntos porcentuales en sus niveles de partidismo, avanzando de 12% a 18% cifra relevante pero que sin duda se queda muy lejos el aumento que en este sentido se observó en la Ciudad de México.

⁷ Entre los votantes del 2000 al 2006, el priismo descendió de un 18.8% al 8.7% y el panismo de 29% a 21.1%. Mientras que en la medición hecha a la población en general, el decrecimiento promedio registrado en las dieciséis delegaciones fue, en el primer caso del 13% al 10% y en el panismo del 24% al 17%.

⁸ Este fortalecimiento contrastó con el declive del panismo y priismo, el primero decreció en promedio anualmente 1.4%, mientras que el priismo lo hizo a una tasa del 0.6%. Por otra parte, de una elección a otra el panismo y priismo decrecieron en 27% y 54% respectivamente.

nivel agregado e individual, las preferencias mayoritarias por el denominado Perredismo en la Ciudad de México.

Si partimos de la premisa de que la mayoría de la gente vota por que con ello expresa su identificación con el partido de sus elección (Campbell, et al. 1960, Riker y Ordeshook, 1968; Fiorina, 1976) y que sin identificación política la democracia no puede funcionar (Paramio, 1998); comprender un fenómeno empírico como el que hemos descrito implica la discusión y la toma de una postura sobre la viabilidad explicativa de los distintos mecanismos causales que están detrás de la formación y desarrollo de las identidades partidistas, postulados por un lado por el denominado Modelo Michigan y por otro por la llamada corriente revisionista. Esta toma de posición implica a su vez una asunción sobre la forma en que los individuos están funcionando en el contexto de una democracia emergente; cómo se están adaptando a distintas situaciones y contextos lo cual se ve reflejado en sus procesos de decisión. (Jones, 2001; Lago, 2005).

En suma, se busca saber cuáles son los mecanismos que articulan todo un proceso causal que está incidiendo en lo que Guillermo O´Donell y Philippe Schmitter (1988) denominaron la plasticidad de las identidades políticas; una cuestión propia o inherente de sociedades que han experimentado de forma reciente un período de transición a la democracia.

La identidad partidista fue un concepto acuñado para dar cuenta de la estabilidad de las preferencias políticas en una democracia, desarrollado por investigadores de la universidad de Michigan principalmente en dos obras seminales: *The Voter Decides* (1954) y *The American Voter* (1960), Angus Campbell, Philip E. Converse, Warren Miller y Donald Stokes definieron a la identidad partidista como una orientación individual de tipo afectivo hacia un partido político.

Para Campbell y compañía la socialización combinada con el aprendizaje produciría una identidad con un partido político que a su vez se vería reflejada en un voto por el mismo. De esta manera, quien vota por primera vez lo hace, en la mayoría de los casos, por el mismo partido por el que votan sus padres; la socialización sedimenta una orientación de largo plazo que independientemente de

su correlación con el sufragio, se erige en un factor que coadyuva a estructurar el incierto y caótico mundo de la política (Mercado, 1997: 291).

Sin embargo, lo que transluce, dada la naturaleza del objeto de estudio que aquí se presenta, es que la identificación con el Partido de la Revolución Democrática no tiene una significación emocional (Tajfel, 1978), tal y como la formulación teórica original sugiere que se basa la membresía hacia una partido u organismo político (Belknap y Campbell 1952; Campbell et al. 1960). Por el contrario, el incremento exponencial en los niveles de partidismo, en este caso de perredismo, serían producto de una evaluación racional del individuo para decidir sus preferencias políticas; una evaluación centrada en una percepción de las condiciones económicas; de una extrapolación retrospectiva del desempeño económico del gobierno.

Esta perspectiva de análisis sobre la formación de un partidismo o identidad partidista que no se basa en la socialización, se ha desarrollado fundamentalmente en el seno de la teoría de la elección racional. Esta teoría postula que los individuos eligen, sobre la base de una evaluación de los distintos cursos de acción, aquella opción que consideran les redituará una mayor utilidad personal; en este sentido el mecanismo principal que explicaría la formación de una identidad partidista sería una racionalidad instrumental.

En este sentido, la noción de partidismo racional que aquí se emplea, sienta sus bases en la premisa teórica que asume que la formación de las identidades político-partidarias conlleva un proceso de carácter exógeno, articulado en torno a la capacidad de los individuos para evaluar la acción del gobierno a partir de sus intereses y sus preferencias políticas en donde el partidismo, es una función del impacto que tiene el desempeño de los partidos en el gobierno.

Ésta ha sido una hipótesis ampliamente explorada y comprobada en una línea de trabajo inaugurada principalmente por Morris P. Fiorina (1977, 1978, 1981 y 1997) ante la evidencia de que en una democracia consolidada como la estadounidense la identidad partidista se mostraba cambiante y poco estable (Paramio, 1998). Por lo que su formación y desarrollo no podía seguir atribuyéndose exclusivamente a los mecanismos tradicionales postulados por los autores de *The American Voter*

(1960) en el sentido de que la identidad partidista es producto de una dinámica de socialización más amplia o de una vinculación estrictamente ideológica.

El mérito de los trabajos de Fiorina fue demostrar empíricamente el impacto que las consideraciones de evaluación retrospectiva centradas en la economía, el voto económico, tienen en la identidad partidista. Con su trabajo se comprobó lo que Stigler (1973), había mencionado años antes en el sentido de que la afiliación partidista tenía una base económica, la cual debía buscarse en el terreno de la distribución de la renta.

Morris P. Fiorina, logró vincular las premisas teóricas de una línea de investigación iniciada por V.O. Key (1958, 1968) y que ha tenido una línea de continuidad en los trabajos de Goodhart y Bhansali (1970), Mueller (1970), Kramer (1971), Tuffe (1978), Lewis Beck (1988), Kiewit y Rivers (1985), Ferejohn (1986), Lewis Beck (1988), y más recientemente Przeworski, Stokes y Manin (1999), por citar algunos trabajos en los cuales las consideraciones y expectativas en relación a la economía nacional, se erigen en el principal indicador de los individuos para evaluar la competencia del gobierno (Dorussen y Taylor, 2002).

Este modelo de análisis del cambio en la identidad partidista implicaba parámetros de evaluación muy claros, propios de democracias consolidadas respecto a 1) el tipo de políticas económicas que se ponían en liza 2) las condiciones políticas necesarias para llevar a cabo la evaluación del desempeño; 3) un funcionamiento específico de las estructuras de gobierno en cuanto a la forma en que se distribuyen los recursos públicos.

El primer punto se refiere a la específica relación entre la evolución del desempeño económico y la identidad partidista; la cual estaría mediada fundamentalmente por el adecuado funcionamiento de las políticas macroeconómicas cuyos indicadores serían: La inflación, el Producto Interno Bruto, el empleo, la seguridad social, el nivel de ingreso y los precios de una canasta básica de consumo (Weatherford, 1978; Hibbs 1979).

Por otra parte, es necesario que las condiciones institucionales que hacen posible que las políticas macroeconómicas funcionen como indicadores para las consideraciones retrospectivas de los individuos y éstas tengan impacto en la

identificación partidaria, se articulen en torno a un modelo de representación basado en una lógica de distribución y provisión de bienes públicos de índole programática; es decir un gobierno cuyo funcionamiento se hace sobre la base de lo que se ha denominado (Adams, 2001), Modelo de Gobierno de Partido Responsable o Responsible Party-Model (RPM).

Para el RPM, el partidismo es una función de la rendición de cuentas intertemporal (vertical); sólo si los individuos sancionan de acuerdo a los principios programáticos de los partidos políticos, los cuales guían su actuación desde el gobierno

En el marco del funcionamiento de este modelo de representación; es la política macroeconómica la que posibilita evaluar la competencia del gobierno como un todo (Dorussen y Palmer, 2002, Gramacho, 2006), esto en la medida en que las personas sean capaces de atribuir claramente la responsabilidad de un buen o mal desempeño; la distancia ideológica entre los partidos sea reducida y existan las condiciones institucionales de participación y oposición enumeradas en su momento por Robert Dalh (1996).

En este sentido, el análisis del impacto de la política económica sobre el voto en lo general y la identidad partidista en lo particular, se ha guiado sobre la base principalmente de la “*incumbency-oriented hypothesis*” (IOH) y en menor medida de la “*policy-oriented hypothesis*” (POH); hipótesis que han puesto un énfasis distinto al efecto de las políticas en el ciclo político-electoral y a la forma en que los individuos llevan a cabo la evaluación correspondiente del desempeño gubernamental (Carcoglu, 1995; Powell y Whitten, 1993; Whitten y Palmer, 1999)

Para la *incumbency-oriented hypothesis* en la evaluación sobre el desempeño que hacen los individuos, no se toma en cuenta el perfil ideológico del gobierno; por lo que se apuesta a que los efectos de la macroeconomía tengan un carácter uniforme en el electorado; es decir si el desempeño es favorable en el próximo ciclo electoral el partido en el gobierno es sancionado con la ratificación del partido y/o la reelección del gobierno en turno; si la situación es contraria es penalizado y los votos son a favor de la oposición (Monroe, 1979; Paldam, 1981; Lewis-Beck y

Belluci, 1982; Alesina, Londregan y Rosenthal 1993; Belluci 1984; Erikson, 1989, Leithner, 1991).

Cabe mencionar que, si bien el partido en el gobierno es el beneficiario de un buen desempeño, en términos operativos queda claro en la mayoría de estos trabajos que, dado el control que tiene de las variables presupuestarias, el principal referente de evaluación y atribución de responsabilidad que tienen los individuos es el Poder Ejecutivo en cualquiera de sus formas (Presidencial o Parlamentario) y a cualquier nivel nacional o subnacional, esta es una cuestión que habrá de tomarse en cuenta en el análisis posterior.

Lo anterior abre la posibilidad, que los recursos públicos puedan ser utilizados de forma estratégica de acuerdo el ciclo electoral correspondiente con la finalidad de ampliar las oportunidades de ratificación (Blaos y Nadreu, 1992; Díaz de Serralde, 1999 y Lago y Lago, 2001).

En contraparte, la *policy-oriented hypothesis* postula que el ejercicio de gobierno carece de neutralidad política en la regulación de la vida económica; los partidos políticos según su adscripción ideológica, tienen distintas competencias y prioridades en la configuración de las políticas económicas del Estado y éstas son ampliamente reconocidas por los individuos en tanto votantes.

De esta forma, los intereses particulares que tienen los partidos políticos en la configuración de la política económica tienen un reflejo en la conformación de coaliciones políticas que son respaldadas o en su defecto rechazadas por sectores específicos de la sociedad⁹.

Sobre la base de esta hipótesis se han desarrollado la serie de trabajos sobre los ciclos económico-políticos (Nordhaus, 1975; Alesina 1988; Alesina y Rosenthal 1992; Hibbs, 1992; Lange y Garret, 1985; Hall 1986 y Boix 1996) que han demostrado que las políticas implementadas por los partidos políticos, están en estrecha relación con la utilidad que éstas reporten a nivel electoral.

En este sentido, si bien las premisas de análisis de la IOH y la POH han sido ya exploradas para explicar en México el impacto que tiene en el voto las evaluaciones retrospectivas sobre el desempeño del gobierno (véase por ejemplo: Buendía

⁹ Esto se expresan fundamentalmente en la a representación en el Congreso y/o el Poder Ejecutivo;

,2000; Beltrán, 2000 y 2003; Cinta 1999; Magaloni, 1999; Poiré, 1999 y 2000 y Morgenstern y Zechmeister 2001), considero que una adopción literal de las mismas, choca frontalmente con la específica capacidad de respuesta que los partidos en el gobierno han tenido a las preferencias de sus ciudadanos en América Latina y en México en lo particular. Esto sin duda conlleva una comprensión distinta de la forma en que el desempeño gubernamental impacta sobre el partidismo.

El RPM bajo el cual surge y se aplica tanto la IOH y la POH es un esquema de representación propio de una democracia consolidada con un alto grado de institucionalización partidaria, que asegura tanto la divergencia como la estabilidad de las preferencias programáticas de los partidos políticos; lo cual permite una vinculación con la ciudadanía de la misma índole; la permanencia y el aumento consecuente en los niveles de identificación política del partido en el gobierno se finca en los resultados positivos de la política macroeconómica y sobre todo sobre la base de que en el desempeño del gobierno no se incurra en distingos o en beneficios particulares en empleo, salud, renta, etc.

Por el contrario, en esta tesis se parte de que la realidad política mexicana y latinoamericana, más allá de las diferencias respecto a los niveles de institucionalización partidaria, ha operado un esquema de representación en que los requisitos políticos y económicos propios del RPM para llevar a cabo la evaluación retrospectiva han estado ausentes.

Después de un proceso paulatino en que, a través de un conjunto de reformas electorales se establecieron las condiciones institucionales necesarias (Dahl, 1991), para la celebración de elecciones competidas, imparciales, con un alto grado de autonomía en su organización, la pluralidad política y social en México ha derivado institucionalmente en un sistema multipartidista y altamente polarizado ideológicamente y que además de que en un régimen político de carácter presidencial como el nuestro, la rendición de cuentas se ve fortalecida por una mayor identificabilidad¹⁰; el cálculo de los individuos sobre el abanico probable de

¹⁰ La evidencia empírica indica que ciertos contextos institucionales, como los sistemas presidenciales, son más proclives a que exista una relación significativa entre condiciones macroeconómicas y voto al gobierno (Powell y Whitten, 1993; Przeworski y Cheibub, 1999).

gobiernos que pueden resultar de las elecciones (Soberg Shugart y Mainwaring, 2002), se ha hecho sobre la base de un tipo de representación que a nivel nacional como subnacional, ha involucrado un desempeño, un tipo de correspondencia o reciprocidad alejado de consideraciones programáticas¹¹.

En este sentido, después del año 2000, establecidas las condiciones para un funcionamiento más o menos óptimo del método democrático, la condiciones de competencia electoral y sobre todo el ejercicio de la función de gobierno de los partidos políticos tuvo que lidiar de forma más clara con los cambios estructurales que se suscitaron, a la par del proceso de democratización, en los modos de producción y gestión económica los cuales condujeron al colapso del desarrollismo; lo cual definió coyunturas críticas (Collier y Collier, 1991) que impactaron no sólo en el formato del sistema de partidos en México¹² y en gran parte de América Latina, sino también en la receptividad de los gobiernos, en la formas de vinculación y agregación de demandas que a través de los partidos políticos se habían establecido con los distintos grupos, actores sociales y la población en general.

De esta forma, el desempeño de los partidos ha estado determinado por un afán de adaptación programática y organizacional a un panorama social fragmentado por la permanencia de altos niveles de desigualdad y pobreza; con un mercado de trabajo erosionado y un debilitamiento de las intermediaciones tradicionales¹³ entre Estado y Sociedad; todo lo cual ha creado las condiciones para el predominio de una lógica de representación y acumulación política de naturaleza clientelar o también denominada de intercambio particularizado (Alonso, 2007; Hagopian, 2007; Kistschelt, 2007).

¹¹ Esto no ha impedido que cobre una creciente importancia el grado de representación política de los gobiernos es decir, el grado de reciprocidad o correspondencia (*responsiveness*), que las decisiones políticas de gobierno tienen con las preferencias ciudadanas, y como dicho proceso de formación de las políticas y sus resultados impactan en las preferencias que los ciudadanos tienen por políticas subsecuentes (Powell, 2007); las cuales se expresan fundamentalmente, en un contexto de rendición de cuentas (*accountability*), en la sanción positiva o negativa de los resultados electorales en lo general y en las adhesiones partidistas en lo particular.

¹² En donde se transitó paulatinamente de un sistema de partidos hegemónico, a uno de carácter dominante y finalmente a un sistema competitivo (Sartori, 1992), a nivel nacional, aunque estos esquemas de relación partidaria se hacen presentes en distinto grado a nivel subnacional.

¹³ Organizaciones campesinas, populares, sindicatos y en general un debilitamiento del entramado corporativo posrevolucionario.

El uso del clientelismo o intercambio particularizado, delineó un contexto basado en la distribución de bienes y servicios como objetos de intercambio para asegurar la lealtad y catalizar la movilización política (Gordin, 2006), esto principalmente como una vía para que, en un primer momento, en gran parte de los gobiernos de América Latina, entre ellos México, pudieran implementarse las reformas orientadas al mercado, producto de las recomendaciones del llamado Consenso de Washington, tal y como dan prueba los trabajos de Levitsky (2003 y 2007), Roberts (1995), Weyland (1996), Stokes (2001), Burgess y Levitsky (2003), Magaloni (2005), Brusco, Nazareno y Stokes (2004), en estos trabajos, desde distintas aproximaciones y casos de estudio, quedo clara una afinidad electiva y coexistencia entre neoliberalismo e intercambio particularizado, a la par de los procesos de democratización que experimentaba la región.

Sin embargo, ante los magros y en muchos casos desalentadores resultados que tuvieron en términos de crecimiento económico las reformas estructurales, los partidos políticos y distintos movimientos personalistas de izquierda aprovecharon la oportunidad que el contexto de apertura y competencia democrática les ofrecía para proponer una vuelta al Estado interventor o, de forma menos radical, una mayor presencia del Estado en la regulación económica.

No obstante, en cualquiera de los dos casos, políticas de apertura económica o Estado interventor, ha quedado constancia de los efectos políticos que tiene la agregación de demandas de acuerdo con una representación y ejercicio de gobierno basado en el intercambio particularizado, llevado a cabo a través de políticas sociales de distinto cuño; las cuales han sustentado su viabilidad a través de subsidios focalizados o universales de distinta índole.

México no fue la excepción. Los altos costos que representó la introducción de reformas liberalizadoras y privatizadoras en distintos ámbitos de la actividad productiva conllevó la aplicación de importantes programas sociales con la finalidad de compensar los efectos del ajuste estructural en materia económica. Coincidiendo con la última etapa del gobierno priísta que se encargó de instrumentar las reformas orientadas al mercado, se diseñaron amplios programas sociales como Solidaridad (1988 – 1994) que abarcó el sexenio de Carlos Salinas de

Gortari y con Ernesto Zedillo el Programa de Educación, Salud y Alimentación, mejor conocido como PROGRESA (1994 – 2000); posteriormente con el arribo de Vicente Fox Quesada y el Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia de la República, estos programas tuvieron continuidad en el denominado OPORTUNIDADES y casi al final del sexenio se introdujo el llamado Seguro Popular destinado a ampliar la cobertura de salud a las personas que careciendo de un empleo formal, no tenían acceso al sistema de seguridad social federal.

En la aplicación de cada uno de estos programas, tanto en la última etapa del régimen priísta como en el primero período de gobierno panista, se ha hecho patente su uso con el objetivo de ampliar la base de apoyo político; esto con un doble objetivo, por un lado, durante el ejercicio de gobierno atemperar los conflictos distributivos resultado de las políticas de ajuste y por otro, durante los procesos electorales ver retribuido el apoyo gubernamental, vía transferencias sociales de distinta índole, por votos, lealtad y movilización político partidaria (Magaloni, Diaz Cayeros y Estéves, 2007 y 2009; Alianza Cívica, 2006 y Fundar, 2006).

La aplicación de los programas sociales, sobre todo durante el período priísta y en forma tal vez más mesurada durante el panismo, se sirvió de lo que Blanca Heredia llamó la potencialidad del sistema político, expresado en el control corporativo, redes clientelares y una alta capacidad institucional que ha permitido limitar la resistencia de los llamados perdedores de las reformas (Heredia, 1997).

Sin embargo, tal y como se presenta en este trabajo, el uso de los programas sociales bajo un gobierno de izquierda no ha sido distinto y por el contrario reviste características particulares que se enmarcan en un contexto en el que surgen amplias expectativas sobre la capacidad de los regímenes democráticos de disminuir la brecha de la desigualdad social. En este sentido, el arribo del Partido de la Revolución Democrática a un segundo período de gobierno en la Ciudad de México, en julio del año 2000, se hizo sobre un compromiso muy claro con los sectores más desfavorecidos de la capital, los cuales se aducía debían su condición de marginación y pobreza a las políticas neoliberales y de apertura económica que a

juicio del entonces candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, sólo habían beneficiado a unos pocos¹⁴.

El ejercicio de gobierno del PRD durante esta segunda etapa, no hizo sino validar la plataforma adoptada por el partido y su candidato durante la campaña electoral; la cual estuvo en todo momento centrada en propuestas destinadas a terminar con la pobreza, proporcionar protección a los ciudadanos, promover la educación y gobernar con la participación de todos los habitantes de la capital.

A diferencia, de la campaña de Vicente Fox, cuya noción del cambio estaba vacía de todo contenido programático y de compromisos claros en materia de pobreza, educación etc, para el futuro Jefe de Gobierno, el arribo de la democracia no podía entenderse sin que las políticas de gobierno asumieran como prioridad la reincorporación de la cuestión social en la agenda política.

De esta forma, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador la estrategia de gobierno del Partido de la Revolución Democrática, experimentó un cambio sustancial que trasladó la atención, centrada hasta ese momento en la necesidad de instituciones y procedimientos formales para la competencia política, al estado de profunda desigualdad económica existente en el país y específicamente en la Ciudad de México¹⁵.

Bajo el lema: “Por el Bien de Todos, Primero los Pobres”, el gobierno Perredista, buscaba rescatar las bases sociales, el carácter asistencial y el Estado benefactor, interventor y regulador propios del modelo posrevolucionario (Labastida, 2003); el proyecto gubernamental estaba buscando retornar a las bases tradicionales de legitimidad del sistema político basado en un pacto social, adoptando un proyecto económico tradicional (Bruhn, 1997: 17).

¹⁴ Al respecto, no es de sorprenderse que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2001 – 2006, comience su diagnóstico de la problemática capitalina, con un marcado énfasis en la crisis profunda que México vive desde hace veinte años, la cual, se decía era culpa de “los equilibrios macroeconómicos dictados por intereses externos que han hecho recaer todos los costos de la llamada modernización sobre los hombros de las trabajadoras y los trabajadores” (Programa General de Gobierno. Gobierno de la Ciudad de México: 2001 – 2006 p. 9)

¹⁵ Para Mainwaring (2006) y Burchardt (2008), lo importante de este cambio que puede definirse como un giro a la izquierda, no radica sólo en la promesa de una mayor dedicación a los problemas y asuntos sociales; sino que fundamentalmente implica una fuerte crítica a la concepción liberal de la democracia.

El planteamiento era claro, la acción del gobierno constituirían una respuesta a la política económica vigente desde hace casi veinte años¹⁶; por primera vez la denuncia del modelo neoliberal se traduciría en políticas públicas concretas¹⁷.

Al centrarse en los sectores menos favorecidos, la selección de prioridades y objetivos sociales que hizo el PRD como partido en el gobierno configuró una estrategia de representación y vinculación de índole particularista, en la cual surgieron nuevas formas de organización, de agregación de intereses; en donde la construcción del partidismo, no hizo sino reflejar la importancia consustancial de ciertos enclaves sociales (Przeworski, 1985: 141) que en este caso tuvieron un impacto directo en el fortalecimiento y expansión del perredismo.

La instrumentación de la política social tuvo como consecuencia la forja o construcción de un partidismo; mediante un proceso que ha constituido, hasta el

¹⁶ El cambio en el modelo económico supuso el relevo en el grupo gobernante durante el período presidencial de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988 los políticos profesionales que habían sido formados bajo los preceptos e ideario de la Revolución Mexicana, y que sostenían las bondades del modelo desarrollista basadas en la inclusión y la movilidad social, fueron relevados en posiciones claves de la conducción política y económica del país; el ascenso de los llamados tecnócratas derivó en una tensión interna en el Partido Revolucionario Institucional, que finalmente condujo a la ruptura de la denominada Corriente Democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo; dicha corriente sostenía que era necesario un proceso de renegociación de la deuda externa con la banca privada y sobre todo pugnaban por un fortalecimiento del Estado en la conducción económica, como la vía para asegurar el crecimiento y la inclusión social. Inspirados ideológicamente en la Revolución Mexicana, al mismo tiempo deseaban democratizar al PRI restándole capacidad de influencia al Presidente de la República en la designación del candidato presidencial, candidatura que finalmente recayó en Carlos Salinas de Gortari, entonces Secretario de Programación y Presupuesto, y principal operador de las reformas económicas durante el sexenio de Miguel de la Madrid.

La naturaleza de este debate y las condiciones de la ruptura en la élite gobernante crearon las condiciones para el surgimiento de un amplio movimiento anti-neoliberal, antecesor directo del Partido de la Revolución Democrática, agrupados en el Frente Democrático Nacional (FDN) que en conjunto con el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Clouthier, representaron la primera muestra de una reorganización de las bases partidarias en la capital del país durante el proceso electoral de 1988.

¹⁷ Esta denuncia había sido una constante, a la par de las demandas de mayor apertura democrática, desde el surgimiento mismo del Partido de la Revolución Democrática, cuando participó inicialmente bajo la figura del Frente Democrático Nacional, en el proceso electoral de 1988: "Siempre nos hemos opuesto a esa política y ahora, desde el gobierno nos empeñaremos en probar con hechos que existen opciones distintas y viables. Nos comprometemos a que, en los límites que impone la condición territorial del Distrito Federal, pondremos en práctica una política cuyo centro será el ser humano, la familia y la defensa del medio ambiente" (Programa General de Gobierno. Gobierno de la Ciudad de México: 2001 – 2006 p. 10)

momento, el punto más alto de la capacidad operativa de un gobierno¹⁸ cuya extracción partidista se tipifica y se reconoce ideológicamente de izquierda.

De esta forma, ¿el partidismo ha sido susceptible a una evaluación del desempeño del gobierno hecha sobre la base de una representación programática o de índole particularista y clientelar? ¿el incremento en la Ciudad de México en los niveles de identificación con el Partido de la Revolución Democrática, durante el período 2000 – 2006 se finca en los mecanismos tradicionales de formación del partidismo: la dinámica de socialización primaria y secundaria o debe atribuirse a una evaluación racional del desempeño de este partido en el gobierno durante este mismo período?

Al fomentarse la identificación mutua a partir de un desempeño específico ¿qué significado tiene el incremento del perredismo en cuanto grupo de identidad?

El manejo que se hará en este trabajo de la identificación partidista conlleva una conceptualización de la misma como una variable dependiente; endógena al efecto que en el corto plazo tienen distintos factores políticos los cuales, dependiendo del contexto, pueden ser: movimientos ideológicos, fluctuaciones económicas, el efecto de temas de relevancia o *issue positions* que conducen a tomar una postura determinada que pueden ser en materia de: educación, políticas de salud, casos de corrupción, etc; o evaluaciones del gobierno, desempeño de los candidatos en las campañas etc.

Todo ello acorde a la perspectiva de análisis de la denominada escuela revisionista del Modelo Michigan (Jennings, 2007), cuya premisa básica sostiene que no es sólo la socialización temprana, sino que también la dimensión política en general y las circunstancias económicas en particular, las que influyen o tienen que ver también con la formación o cambio en la identificación con un partido.

Algunos investigadores han diferenciado los conceptos de identidad partidista y partidismo, vinculando a la primera con los planteamientos de la escuela de Michigan, definiéndola como una orientación afectiva y emotiva hacia los partidos

¹⁸ Para propósitos de este trabajo, entendemos a el gobierno como aquel actor que expresa través de las distintas políticas públicas que se formulan e implementan una “visión clara y socialmente compartida del futuro de la sociedad; capaz de producir eficientemente servicios (seguridad, infraestructura, ambiente, salud, educación) que contribuyan a generar y sostener la calidad de la convivencia”(Aguilar, 2007: 20)

políticos, por otra parte la noción de partidismo, para Fiorina y la llamada escuela revisionista, entrañaría una vinculación racional.

Esta diferenciación, para Sören Holmberg (2007), implica un tratamiento diferenciado dado que son dos nociones teóricas completamente diferentes y que por lo tanto se deben medir y comprobar empíricamente de distinta manera, teniendo clara esta distinción para efectos de esta investigación se utilizará indistintamente la denominación de identidad partidista y partidismo, aunque su tratamiento como variable dependiente, se inscribe dentro de la segunda perspectiva de análisis.

La estrategia analítica de este trabajo asume que el partidismo o la identidad partidista es el reflejo de una evaluación racional de los representantes en función del desempeño de su gestión (Ferejohn, 1998). Sin embargo no se toman los intereses y las preferencias como dadas. Por el contrario, la identidad partidista está por un lado reflejando la acción de un gobierno el cual a través de las políticas implementadas, satisface los intereses y ciertas preferencias individuales; es decir se parte de una concepción del proceso político como el motor de transformación de las preferencias a través de una discusión racional (Elster, 1992), en donde el rol de los partidos políticos es fundamental en el proceso de agregación de preferencias (Downs, 1957; Schumpeter, 1961).

Al respecto, el análisis de Fiorina sedimentó un camino vinculado a una concepción de racionalidad instrumental y utilitaria; es decir se prefiere a un partido político si y sólo si esto significa que éste desde su posición en el gobierno es eficaz para resolver los problemas que atañen al elector y se prefiere a un partido político si y sólo si éste ha provisto por medio de su desempeño en el gobierno la utilidad esperada.

La conformación del vínculo que realiza el partido es con el fin de prohijar la deliberación; la cual tiene como fin cambiar el curso de las creencias, “ya sea las creencias técnicas acerca de las relaciones causales entre políticas y resultados, o bien las creencias de equilibrio acerca de la eficacia política de direcciones diferentes de la acción colectiva” (Przeworski, 2001)

El fin es encontrar y promover las razones que resulten convincentes para todos (Cohen, 1989: 33).

Antes de terminar en voto, la identidad es producto de una decisión racional, en donde lo que se decide es con qué partido identificarse. La identificación es producto de una evaluación más duradera, que si bien se nutre de un beneficio concreto, inmediato,

El voto es lo que autoriza a los gobiernos a gobernar (Przeworski, 2001), sin embargo dentro del proceso de construcción de una identidad lo que se ofrece son las distintas razones, a través del discurso y de acciones concretas en materia de políticas públicas, que conducirán finalmente a un proceso de agregación que involucra directamente la decisión electoral.

La conformación de una identidad, de un partidismo expresan una fase previa de la autorización, ratificación o rechazo que se ejerce vía el sufragio.

Un partidismo racional en este caso implica decisiones socialmente vinculantes, en donde se ofrecen motivos para participar en la toma de decisión gubernamental, tal y como impulsó el Gobierno de la Ciudad de México, con la iniciativa de las asambleas ciudadanas como vía de participación/vinculación de los beneficiarios de la política social. (Tal y como se presenta en el capítulo II)

En este sentido, la adhesión partidista además de expresar una decisión eficaz del individuo de asegurarse su propio interés (Hardin, 1982: 10), en el caso que nos ocupa, la oferta y la implementación de las políticas juega un papel fundamental debido a que entran en juego las creencias que previamente tienen los individuos sobre los resultados que estas políticas ofrecen. La naturaleza del vínculo clientelar implica no sólo un la satisfacción “inmediata” de una necesidad o la opción por un recurso material ofrecido por el gobierno en aras de dicha satisfacción, sino también la decisión específica entre políticas en donde se prevé el efecto de las políticas sobre los resultados, creencias técnicas que conllevan la apreciación de relaciones causales entre políticas y resultados (Vanberg y Buchanan, 1989, Austen-Smith 1992), y se prevé las creencias de los demás acerca de los efectos que se espera tengan las políticas implementadas.

De esta manera, la configuración de un partidismo racional es endógeno al proceso político, articulado en torno a nuevos vínculos y estrategias de agregación y convencimiento en donde el partido en el gobierno trata o intenta convencer sobre la viabilidad de sus políticas para la obtención de los resultados que los individuos están esperando.

En este trabajo la noción de racionalidad descansa sobre el reconocimiento de que los individuos están constreñidos por sus limitadas capacidades cognitivas y su información reducida; la racionalidad se expresa en un comportamiento que es adaptativo dentro de los constreñimientos impuestos por situaciones externas y las capacidades individuales del que decide (Simon, 1985:79)

De esta forma, el procesamiento de la información se realiza en función del contexto en que se produce; lo cual explicaría las diferencias que se encuentran en el modo en que la gente presta atención a elementos claves de su entorno. A partir del grado de atención, las respuestas son distintas, la interpretación es diferenciada aún en contextos sociales similares; la diferencia está en la selección y luego la interpretación de la información (Jones, 2001)

Esto implica que la formación y el cariz particular que adquiere la identidad partidista en diversos contextos depende de la selección y atención específica hacia determinados temas y/o políticas que los individuos van posicionando en un horizonte de tiempo prolongado, como ejes articuladores del debate acerca de la direccionalidad que debe adoptar el ejercicio de gobierno y la representación política.

Para esta investigación, la configuración del partidismo racional se desprende de una intencionalidad y maximización de utilidad que se produce en el afán de los individuos de darse a sí mismos una identidad, a partir de la cual podrán decidir sus preferencias y estrategias futuras en la medida en que toma parte de una acción colectiva como la participación política vía el sufragio y/o, como se verá más adelante, en el involucramiento en redes específicas de intercambio.

Al respecto, Ludolfo Paramio (1999) nos dice que la gente puede movilizarse para alcanzar unos fines que tiene claros (el dinero, la fama, la justicia, etc) o puede movilizarse precisamente porque no tiene nada claro cuáles son sus fines; en este

sentido Boudon (1992) y Simon (1995) afirman: las personas tienen buenas razones para hacer lo que hacen o pensar lo que piensan; en este caso la selección de determinadas acciones se encuentra la mayoría de las veces vinculadas a la producción o reforzamiento de una identidad.

La racionalidad en la conformación de una identidad partidista opera como una forma de adecuación de las acciones de los sujetos, de adaptación muchas veces, a situaciones complejas o problemáticas (Popper, 1997: 179)

La identidad es solo un referente de la acción o desde otro ángulo el voto simplemente es una reafirmación de la identidad. La racionalidad se asume como producto de un proceso en donde la información es incompleta, la ignorancia es parcial y usualmente se termina con el descubrimiento de insatisfactorios, no óptimos, cursos de acción (Simon, 1985: 295)

De esta manera, el involucramiento de los individuos está determinado por la naturaleza específica del contexto y del proceso político en el que se están desarrollando. Donde la vinculación con la acción colectiva se relaciona ya sea por que los individuos están 1) expresando su identidad ó 2) están en busca de una identidad.

La concepción de partidismo racional de este trabajo se planta frente a la noción clásica de intereses exógenos y preferencias completas y estables.

Por el contrario el partidismo es el resultado de un proceso de producción política en que se involucra la acción institucional, la acción político-partidaria, la difusión ideológica y la movilización política en sentido amplio (Maiz, 1995). En estos procesos la acción política es el resultado de una serie de facetas políticamente constituidas o articuladas en torno a intereses sectoriales o programáticos.

La formación o activación de preferencias es consustancial a la génesis o producción política de las identidades, un proceso en constante redefinición y de mutua correspondencia.

El partidismo racional tiene como fundamento el ámbito de la política, entendido este como un espacio de producción de identidades, valores e intereses, en este caso a través de los partidos políticos, en el que ciertamente la capacidad racional

del individuo entra en juego y se enfrenta racionalmente a todo constreñimiento social o incluso de preferencias inmutables.

Tal y como lo sostienen James G. March y Johan P. Olsen: “es a través de la política que los individuos desarrollan sus identidades, sus comunidades y los bienes públicos” (March y Olsen, 1989)

Por su parte, los partidos en tanto organismos que forman parte de un entramado institucional (North, 1990) buscan en este caso mediante un particular y estratégico desempeño, autorreforzarse y dificultar su sustitución mediante los efectos de los incentivos que comportan (Colomer, 2001).

En este sentido, se parte de la premisa de que los partidos políticos en el ejercicio de sus funciones de gobierno y como organizaciones¹⁹; proporcionan una estructura a la interacción humana vinculándolos por alguna identidad común hacia ciertos objetivos, en donde la articulación de la representación política entendida esta fundamentalmente como la agregación de demandas e intereses se lleva a cabo mediante una combinación de aptitudes, estrategia y coordinación; mediante intervenciones limpias y a veces sucias (North, 1990).

Desde nuestro marco de análisis, esto implica que los partidos políticos requieran y fomenten la identificación mutua entre sus integrantes potenciales (Gutmann, 2008: 17), por medio de acciones específicas de gobierno que promueven en este caso la consecución de una serie de demandas que corresponden a los intereses y preferencias de un sector o sectores de individuos los cuales a cambio sancionan positivamente y/o ratifican al partido en cuestión en los puestos de gobierno; la identidad o partidismo se hace presente en la medida en que este compromiso se hace efectivo vía el voto entre las dos partes.

Bajo esta perspectiva, el partidismo o la identidad partidista* no sería otra cosa que la expresión de intereses y preferencias distintivos y la inclinación hacia valores

¹⁹ V.O. Key en su trabajo *Politics, Parties and Pressure Groups*, New York, Crowell, 1964. Distingue las funciones de los partidos a lo largo de tres dimensiones: Partidos en el electorado, Partidos como Organizaciones y Partidos en el Gobierno.

Tal y como se mencionó anteriormente, algunos investigadores han diferenciado los conceptos de Identidad partidista y Partidismo, vinculando el primero a la noción clásica de la escuela de Michigan, como orientación afectiva y emotiva hacia los partidos políticos mientras que la noción de Partidismo entrañaría una vinculación racional para Fiorina y la llamada escuela revisionista; esta diferenciación para Sören Holmberg (2007), implica un tratamiento diferenciado dado que son

específicos; esto conduciría a una identificación mutua (Gutmann, 2008), en la medida en que los individuos que se identifican con aquellos otros que comparten el mismo vector de intereses, preferencias y valores son movidos a la acción.

Es decir hablar de un partidismo racional conlleva que determinados intereses, preferencias y valores se traduzcan en un compromiso mutuo hacia una acción específica.

Un partidismo racional es producto de un marco de integración y relación de mecanismos que tienen verificativo empírico a través de la acción de las instituciones políticas de gobierno que proveen a los partidos y los ciudadanos, información, oportunidades, incentivos y restricciones que inciden en la elección de ciertas estrategias que involucran principalmente la provisión de bienes públicos, la articulación de la dimensión distributiva.

La explicación del desarrollo de un partidismo racional, al igual que distintas manifestaciones del comportamiento político²⁰, es el resultado de la concatenación de diferentes mecanismos que siguen el modelo macro- micro- macro (Coleman, 1986, 1990 y Weber, 1922), los cuales dependen de una estructura y acción determinada.

De acuerdo a este modelo de explicación, un cambio a nivel agregado en este caso en los niveles de partidismo, exige mostrar “cómo macroestados en un punto en el tiempo influyen en el comportamiento de los actores individuales y cómo las acciones que realizan estos actores generan nuevos macroestados en un momento posterior. Las relaciones entre estructuras son así el resultado contingente de las acciones de unos actores sujetas a la interacción con las de otros agentes y con el propio contexto” (Lago, 2005).

Al respecto la tesis plantea las siguientes hipótesis principales:

a) El incremento exponencial en los niveles de identificación política que experimentó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), durante el período 2000 – 2006 en la Ciudad de México, obedeció a una lógica de desempeño

dos nociones teóricas completamente diferentes y que por lo tanto deben medirse y comprobar su existencia empírica, teniendo en mente esta distinción. Para efectos de esta investigación se utiliza indistintamente la noción de identidad partidista y partidismo; no obstante su tratamiento en tanto variable dependiente se inscribe dentro de la segunda perspectiva de análisis.

²⁰ Al respecto véase Lago, 2005

gubernamental y construcción de apoyo por la vía de la política social que, basada en una estrategia de vinculación e intercambio particularizado fue el vínculo por medio del cual se dio un cambio en las formas de organización política y representación de intereses.

b) el desempeño de gobierno basado en el intercambio particularizado, generó a nivel individual un esquema de adhesión ó partidismo racional que expresó la intencionalidad del individuo de adherirse al Partido de la Revolución Democrática, en función del beneficio material obtenido y por el hecho de compartir con un segmento específico una característica socialmente compartida: la marginación o pobreza;

c) la evolución del perredismo en la Ciudad de México, no sólo se caracteriza en su dinámica por un componente racional; sino también por uno de de mayor raigambre que comparte con el partido además de posturas redistributivas en lo económico posturas liberales en lo social este tipo de partidismo lo denominamos ideológico.

En este sentido, si establecemos la premisa de que un partidismo racional emerge en el marco de una relación de consistencia entre el desempeño de un partido en el gobierno y la capacidad individual de evaluarlo como un curso de acción que satisface o no sus preferencias e intereses; confirmar estas hipótesis implica delinear la serie de mecanismos que prohicieron un desempeño basado en una estrategia de vinculación e intercambio particularizado y la particular respuesta de los individuos a partir de esta acción.

El primer mecanismo es llamado situacional o contextual: aquí corresponde establecer como las propiedades de los sistemas influyen en las consideraciones de los actores De lo que se trata es ver cómo funcionan las distintas estructuras, cómo se articulan institucionalmente los intereses de los distintos actores políticos, en este caso en un entramado político clientelar. “Se trata de un primer filtro de los comportamientos compuesto por las restricciones físicas, económicas y culturales, legales o psicológicas que afronta un individuo y definen su conjunto de oportunidades” (Lago, 2005).

El segundo mecanismo es de tipo cognitivo, aquí el individuo asimila el impacto estructural, cómo las personas actúan o responden al conjunto de oportunidades que se le presentan. Entra en juego la racionalidad como el mecanismo que posibilita a los actores escoger o no de acuerdo a sus intereses entre distintos cursos de acción.

El último mecanismo es de tipo relacional e ilustra la transición del nivel micro al nivel macro o lo que es lo mismo como las acciones individuales afectan o generan resultados en el nivel macro nuevamente, del cual partieron.

La formación del partidismo desde la perspectiva de un modelo macro – micro – macro se demuestra de la siguiente forma:

El mecanismo contextual muestra como el Gobierno de la Ciudad de México a partir del año 2000, al colocar nuevamente al Estado como un interventor de la vida social y económica y como el centro de la acción colectiva y del conflicto político de la sociedad (Colom, 1998: 23), determinó un desempeño partidario encaminado a vincular y agregar las demandas de distintos grupos, actores sociales e individuos.

La expansión del perredismo no hubiera sido posible sin la conformación de nuevos vínculos partidistas basados en una estrategia de acumulación política; fincada principalmente en un desempeño de gobierno, sustentado en la implementación de políticas sociales que redistribuyeron de forma particularista distintos recursos públicos. Esta estrategia de gobierno produjo nuevos marcos de identificación mutua (Gutmann, 2008), que cohesionaron a grupos de individuos heterogéneos entre sí: jóvenes, niños, ancianos, mujeres, discapacitados, desempleados, en torno a un común denominador compartido de marginación y pobreza.

Las condiciones estructurales generaron los incentivos necesarios para que el individuo en aras de la consecución de su bienestar individual se inserte en una red clientelar y se logre con ello una valoración positiva de la gestión del partido en el gobierno, que impacta o se expresa en la identificación partidaria.

Se produce una identidad por adscripción (Gutmann, 2008), en donde el ser perredista o estar identificado con el perredismo expresa el curso de acción, que mejor satisface los intereses.

La estrategia de gobierno basada en el uso de recursos estatales informa de los intereses que las personas tienen en común y ofrece la solución o la mejor vía de satisfacción de dichos intereses. El medio es el intercambio, por el cual el partido en el gobierno busca construir una identidad adscriptiva, organizando a las personas con base en características comunes no voluntarias, como lo es su condición de marginación y pobreza. El mecanismo macro – micro genera el cálculo de los beneficios que va obtener del representante en funciones y el costo que supone optar por una estrategia distinta, lo cual está compensado con la valoración subjetiva que el individuo hace sobre lo que recibirá a cambio de adscribirse al partido en el gobierno. En suma el ser perredista le procura beneficio económico o material.

El mecanismo cognitivo, implica como veremos más adelante, que un partidismo racional conlleve cambios en la orientación y balance de la identidad partidista producto de una transferencia de lealtades, de una rotación, inserta en un contexto de más de dos partidos relevantes como es el sistema de partidos mexicano.

Finalmente el mecanismo relacional, muestra como a nivel agregado un partidismo racional expresa la conformación de una coalición de apoyo en el contexto de una democracia emergente, moldeada principalmente por factores políticos, específicamente por una lógica de desempeño alejado de consideraciones programáticas.

En este marco, la instrumentación de la política social tuvo como consecuencia la forja o construcción de un partidismo; mediante un proceso que ha constituido, hasta el momento, el punto más alto de la capacidad operativa de un gobierno cuya extracción partidista se tipifica y se reconoce ideológicamente como de izquierda.

La denominación partidismo racional comporta explicar por un lado las causas de un incremento exponencial, inédito hasta el momento, que se produjo en un período muy corto, en los niveles de identificación política de uno de los

principales partidos políticos y las consecuencias que dicho crecimiento tuvo al interior de la coalición perredista política e ideológicamente.

Organización de la Tesis

En el capítulo I se lleva a cabo en primera instancia una revisión de los diferentes modelos teóricos que postulan distintos mecanismos causales en la formación de la identidad partidista, la discusión gira principalmente alrededor de tres ejes 1) la conceptualización en cada uno de estos planteamientos de la identificación partidista o el partidismo 2) qué explica la formación de la identidad partidista y 3) cuál es el sitio de la identidad partidista en el embudo de la causalidad; el partidismo o la identidad partidista es una variable explicativa del comportamiento individual, o por el contrario debemos comprenderla como un dato cambiante y poco estable.

En este mismo capítulo se exponen las diferencias entre los dos principales modelos de representación/vinculación que determinan el cambio y/o estabilidad en los patrones de partidismo: El denominado Modelo de Gobierno de Partido Responsable ó *Responsible party government* y el modelo clientelar o de intercambio particularizado, denominado *Patronage-based, party voter linkage* y cómo cada uno de ellos aunque postulan un mismo principio de racionalidad individual como mecanismo de formación de las preferencias individuales, ofrecen parámetros de evaluación distintos que, en caso del modelo de intercambio particularizado (*patronage*), implican una comprensión distinta del partidismo.

En el capítulo II, se documenta la dinámica del partidismo durante el período 2000 – 2006 en cada una de las dieciséis delegaciones en que se encuentra dividida la Ciudad de México. Se observa el incremento exponencial del perredismo sobre todo a partir de la segunda mitad del sexenio así como también el decrecimiento del priísmo y panismo en este tiempo.

La presencia de estas regularidades empíricas, principalmente el crecimiento del perredismo, permiten su vinculación con la dinámica del gasto social implementada por el gobierno perredista.

De esta forma, se comprueba que las causas de la expansión del perredismo se deben a la estrategia de gasto de la política social, la cual definió con precisión

quién fue beneficiado, cómo fue beneficiado y cuál fue la estrategia de organización y el cariz ideológico que permeó la política social durante el gobierno del Partido de la Revolución Democrática.

De igual forma, en el capítulo II se muestra que la construcción del partidismo con base en la política social se basó en: 1) una plataforma ideológica amplia 2) una estrategia económica específica que conlleva beneficios materiales concretos y 3) la conformación de nuevas organizaciones que permiten un mayor grado de vinculación y participación de los sectores a los que se quiere beneficiar (Boix, 1996: 71)

De esta forma, se documenta que el desempeño del PRD como partido en el gobierno se basó en:

1) Una propuesta ideológica concreta; en la que se postuló lo que se consideraba necesario para garantizar la igualdad y la justicia social. 2) Una estrategia económica basada en la política social en la que se delinearon los grupos que serían prioritarios en el destino de beneficios materiales concretos; 3) La puesta en funcionamiento de nuevas formas de organización, los cuales impulsaron distintos mecanismos de participación a la par del gasto social.

Cada una de estas etapas respondió a los postulados programáticos del PRD respecto a las funciones que debe cumplir el Estado en el terreno económico; en la consecución de la justicia y el bienestar social; todo lo cual se constituyó en una respuesta integral a las políticas orientadas al mercado del Gobierno Federal.

En lo concerniente a la estrategia económica se muestra cuáles fueron los criterios de asignación del gasto y su forma de implementación, esto con el fin de presentar sus consecuencias en el incremento del perredismo, para ello me centro en los cuatro programas que destinaron transferencias de renta directa a sus beneficiarios, los cuales fueron:

1. Programa de Ayuda a Adultos mayores
2. Programa de Apoyo al Empleo
3. Programa de Becas Escolares
4. Programa de Apoyo a Discapacitados

En suma, se expone cómo la construcción del partidismo que estuvo basada en nuevas pautas distributivas/retributivas de índole particularista redefinieron las formas de vinculación clientelar conlleva presentar también la dimensión del gasto social en su conjunto; el impacto que tuvieron los beneficiarios directos; la inversión per cápita que comprende el conjunto de programas sociales, no sólo aquellos que representan beneficios directos, y el mecanismo de participación y de agregación de demandas que por medio de asambleas vecinales, el gobierno de la Ciudad de México instrumentó.

Todos estos factores constituyeron las variables independientes que ofrecen la posibilidad de hacer observable la forma en que el gobierno transformó las señales emitidas por los ciudadanos en políticas públicas concretas y en nuevas formas de organización, lo cual habría de incidir en los niveles de perredismo

Posteriormente, en el capítulo III se aboca a demostrar cómo la estrategia de intercambio particularizado se constituyó en una variable explicativa fundamental del incremento en los niveles de perredismo que se observaron a nivel individual Ciudad de México en el proceso electoral del 2 de julio del 2006

El propósito es mostrar cómo esta lógica de desempeño se puso a prueba desde el plano de la *accountability* o rendición de cuentas electoral, en donde la expansión del perredismo no hace sino reflejar el grado de representatividad que el Partido de la Revolución Democrática alcanzó durante un período de seis años.

De esta forma, se muestra cómo la expansión del perredismo obedeció a una capacidad de cálculo individual realizada sobre el beneficio obtenido por un desempeño previo del partido en el gobierno. No obstante los parámetros de evaluación fueron completamente distintos a los que postula el *Modelo de Gobierno de Partido Responsable* o *Responsible Party- Model (RPM)*.

Finalmente, el propósito del capítulo IV es identificar empíricamente no sólo la existencia de un partidismo racional sino también la presencia de un partidismo ideológico. A través de un análisis de estabilidad y la consistencia ideológica respecto a temas de política pública y orientaciones normativas, se espera encontrar que la conformación del perredismo se caracteriza no sólo predominantemente por un componente racional, sino también por uno de mayor

raigambre que exprese un apoyo no sólo a posturas redistributivas en lo económico, sino también a posturas liberales en lo social; un tipo de perredismo que denominamos ideológico de izquierda.

En el capítulo se parte de la premisa de que el partidismo/perredismo en la Ciudad de México se conforma no sólo con base en intereses y preferencias individuales, acordes a un desempeño gubernamental basado en el intercambio particularizado, sino también a valores específicos, acordes con una identidad de izquierda.

Los hallazgos respectivos muestran que el partidismo puede ser desarrollado a partir de la acción del gobierno independientemente de la afinidad ideológica que se tenga con él.

Datos y Métodos

La evidencia empírica que sustenta esta tesis se basa fundamentalmente en el diseño de una base de datos propia con datos de los distintos programas sociales, información que comprendió los seis años de gestión del Gobierno de la Ciudad de México y tomo como base o unidad de análisis las dieciséis delegaciones políticas en que se encuentra dividida políticamente la capital del país

La base se construyó con datos de los siguientes programas: 1. Programa de Ayuda a Adultos mayores; 2. Programa de Apoyo al Empleo, 3. Programa de Becas Escolares, 4. Programa de Apoyo a Discapacitados y se le indexaron los datos correspondientes a los niveles de perredismo de cada año por delegación

Posteriormente, con la finalidad de verificar la existencia o ausencia de relaciones lineales entre las variables independientes de gasto y el perredismo, se diseñaron dos modelos de regresión en forma de panel que posibilitaron dar un seguimiento del aumento en los niveles de perredismo en las delegaciones (unidades transversales) a lo largo del tiempo.

Algunos beneficios de este tipo de modelos, en comparación, por ejemplo, con los denominados de series de tiempo o de corte transversal²¹, es que proporcionan una

²¹ El problema de investigación que interesa estudiar esta definido, tanto temporal como espacialmente. El estudio abarca un periodo de tiempo de 6 años, que va del 2001 al 2006 en el Distrito Federal. A su vez, dentro de esta Entidad, la unidad de observación son las delegaciones políticas. Ahora bien, un modelo de corte transversal no permite estudiar la relación funcional planteada ya que tendrían que correrse seis de estos modelos. Por lo que se refiere a modelos de series de tiempo, se tendrían que realizar 16 modelos, uno para cada delegación. Pero la limitación

mayor cantidad de datos informativos, más variabilidad, menos colinealidad entre variables, más grados de libertad y una mayor eficiencia.

En este sentido, con la aplicación de estos dos procedimientos se trató de alcanzar el mayor nivel de individualidad del impacto de las variables explicativas de gasto sobre la variable dependiente y también incorporar una variación en el análisis de la identidad partidista por delegación; en particular una variación en los resultados y análisis de los efectos fijos²².

Esta estrategia de comprobación constituye la mejor forma de organizar los hechos y mostrarlos como consecuencias observables de nuestra hipótesis. Los modelos que se proponen se ajustan a investigaciones previas.

Por otra parte, con las encuestas delegacionales aplicadas por el departamento de investigación del periódico *Reforma* se describe la evolución que a nivel agregado presentó el perredismo y en contraparte la disminución que experimentó el priísmo y principalmente el panismo; se detectan los años en que estos patrones presentan una mayor oscilación. El propósito principal es mediante la descripción establecer las regularidades que constituyen el explananda o la variable dependiente de nuestro análisis.

En el capítulo III se utilizan dos encuestas de salida o *exit poll* también realizadas por el grupo Reforma. Al respecto, con el fin de comprobar los cambios en la composición del partidismo que se suscitaron del proceso electoral del 2000 al 2006 y comprobar el impacto de los programas sociales en el perredismo, se llevo a cabo en primer instancia un análisis bivariado, el cual permitió un primer acercamiento a los cambios en la composición social e ideológica del partidismo en lo general y el perredismo en lo particular. En segundo lugar, se realizó un análisis de correspondencia simple con los datos del año 2006, que permitió ubicar la relación existente entre identidad partidista y las distintas variables independientes contempladas: edad, género, escolaridad, sector de ocupación, marginación por

más importante es el número de observaciones que se tendrían para cada una de estas alternativas. Al plantear un modelo de regresión en forma de panel los datos disponibles crecen y permite analizar simultáneamente, la relación funcional entre nuestras variables tanto temporal como espacialmente.

²² Al respecto, en el apartado respectivo y en el apéndice metodológico se dan mayores pormenores de los criterios metodológicos que definieron la variable de referencia y en general que orientaron el diseño de los modelos.

delegación, percepción de la economía, aprobación del Jefe de Gobierno, aprobación Presidencial y por supuesto beneficiario o no de programas sociales, y en tercer lugar un análisis de correspondencia múltiple, que presenta primero la relación entre beneficiario de los programas sociales con las distintas categorías de ideología, ingreso, marginación, sector de ocupación, escolaridad, edad

Posteriormente, se realizó un análisis multivariado, que conllevó primero un modelo binomial exclusivamente abocado a los determinantes del perredismo y en segunda instancia un modelo multinomial que posibilitó comparar las diferencias significativas existentes entre los distintos tipos de partidismo; tomando al perredismo como parámetro de comparación, lo cual permitió establecer la importancia que tuvieron los programas gubernamentales como variable explicativa y distintiva del perredismo.

Con las probabilidades promedio derivadas del modelo multinomial se comparan los cambios en la composición política y social del partidismo al tiempo que se comprueba el proceso de realineamiento por rotación de las lealtades partidistas; en este caso entre panismo y perredismo y como el hecho de ser beneficiarios de los distintos programas sociales determinó una diferencia radical en la relación de las distintas variables explicativas con el perredismo frente al resto de las adhesiones político partidarias.

Finalmente en el capítulo IV para la distinción con el objetivo de ubicar la existencia de un perredismo ideológico y otro de tipo racional se utiliza el componente concerniente a la Ciudad de México del Estudio Panel México 2006, el cual consistió en tres rondas de entrevistas llevadas a cabo en Octubre del 2006, Mayo y Julio del 2006 respectivamente.

La encuesta fue realizada conjuntamente entre el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y el departamento de Investigación de Grupo Reforma.

El estudio panel permitió una clasificación descriptiva confiable en función de la estabilidad y consistencia de las respuestas concernientes a la auto-ubicación ideológica a lo largo del tiempo y permite vincular los resultados con lo observado en el capítulo referente a los cambios en la composición política y social del perredismo.

Capítulo I. Los Modelos de Explicación de la Formación del Partidismo

En la literatura académica se pueden reconocer tres modelos de explicación o teorías que ponen un acento distinto en los mecanismos causales que operan en la formación de las preferencias partidarias: La primera se desprende del marco analítico desarrollado por Seymour Martin Lipset y Stein Rokan (1967) el cual destaca el papel de los clivajes sociales como determinantes de las actitudes políticas; los clivajes en tanto líneas divisorias fundamentales como la clase social (Berelson, McPhee y Lazarfeld, 1944), de tipo cultural como la presencia de una mayor o menor orientación cívica en los ciudadanos (Almond y Verba, 1963), o el desarrollo económico (Inglehart, 2000), se constituyen en las variables explicativas fundamentales que ponderan una correlación entre la posición en la estructura social que ocupa el individuo y su identificación política.

El segundo marco de análisis es el denominado Modelo Michigan, cuyo mérito principal consiste en que establece una diferenciación entre factores o fuerzas de largo y corto plazo y el lugar que ocupan dentro de una lógica de explicación causal. En donde, producto de un amplio proceso de socialización la identidad partidista, se erige como la principal fuerza de largo plazo, en la variable explicativa fundamental del comportamiento individual en lo general y electoral en lo particular.

El tercer postulado teórico sobre el desarrollo de la identidad partidista se basa en que la formación de la identidad partidista es producto de factores exógenos en donde el individuo tiene la capacidad de evaluar y decidir el sentido de su adhesión política. En donde la identidad partidista o el partidismo, es una función del impacto que tiene el desempeño de los partidos en el gobierno; premisa teórica ampliamente explorada en una línea de trabajo inaugurada principalmente por Morris P. Fiorina (1977,1978, 1981 y 1997) a partir del hecho comprobado de una identidad partidista que manifiesta márgenes considerables de inestabilidad.

Cada una de estas teorías enfatiza tres mecanismos de formación distintos del partidismo: Las fuerzas sociales, los procesos de socialización y el cálculo instrumental, pero sin duda uno de los aspectos distintivos y fundamentales es que difieren entre sí respecto a la capacidad que tiene el individuo de funcionar en una democracia (Carmines y Huckfeldt, 2001), en la facultad de adaptar sus procesos

de decisión a las situaciones o contextos que afrontan (Jones, 2001, Lago, 2005) en función del rol que funge en cada una de ellas la racionalidad individual.

A continuación se presenta de forma más amplia las diferencias respecto a su 1) la conceptualización en cada uno de estos planteamientos de la identificación partidista o el partidismo y 2) Qué explica la formación de la identidad partidista 3) cuál es el sitio de la identidad partidista en el embudo de la causalidad.

1. Los Clivajes o Líneas divisorias como fundamento de las preferencias partidarias

El término clivaje o cleavage en su acepción en inglés, el cual puede traducirse como línea divisoria, fue utilizado por Seymour Martín Lipset y Stein Rokkan en su obra *Party Systemas y Voter alignments: cross national perspectives*, para dar cuenta de cómo las grandes divisorias sociales: clase social, religión, etnia, y cultura, tendrían una predominancia distinta como líneas de fractura que explicarían, en función de las características de cada sociedad, la formación de las identidades políticas.

Las líneas divisorias, cuya incidencia en cada sociedad es distinta, obedecen a procesos históricos o coyunturas críticas específicas que dan lugar a expresiones partidistas concretas estos son: 1) Centro – Periferia 2) Iglesia – Estado 3) Campo – Industria 4) Propietario – Trabajador.

1. Centro – Periferia

Esta primera línea hace referencia, a los problemas derivados de la formación del Estado Nación, problemas asociados directamente a su cohesión en dos aspectos 1) El tipo de religión y 2) La lengua o idioma que habría de adoptarse.

Durante el medioevo y específicamente la época feudal la lengua utilizada era el latín, aún bajo la coexistencia de una multiplicidad de esquemas lingüísticos, que posteriormente habrían de ser rebasados y cohesionados bajo una sola lengua dominante propia de los grupos o líderes que estaban conduciendo el proceso de formación estatal. Sin embargo, esto no fue sencillo y hasta la fecha se observa en distintos países que se conservan comunidades lingüísticas que abarcan provincias enteras; coexistiendo con la llamada lengua nacional; aspecto que es retomado por partidos locales que ostentan muchas veces no sólo la bandera de la autonomía lingüística, sino también étnica, unos reivindicando su pertenencia a la nación,

otros demandando su plena separación y conformación posterior de un nuevo Estado*.

2. Iglesia - Estado

Los partidos políticos actuales pueden nutrir sus diferencias a partir del conflicto existente entre el Estado y la Iglesia. La disputa entre estas dos instancias, radica en los márgenes de control que sobre los ciudadanos reclamó el Estado, con la pérdida consecuente de los mismos por la Iglesia.

Lo anterior se traduce hasta hoy en día en la mayoría de los países del mundo, en el manejo de la educación que hace el Estado alejada de cualquier principio dogmático religioso, principalmente el católico ó musulmán, previa diseminación de los principios liberales de la revolución francesa.

3. Campo – Industria

Esta línea divisoria se inaugura con el advenimiento de la revolución industrial. En la medida en que las sociedades agrícolas comenzaron su paulatina transformación a sociedades industriales, la estructuración de las políticas estatales empezó a oscilar entre la protección y el subsidio a los campesinos y los cultivos y el fomento al espíritu del libre comercio con base en la oferta y demanda; la posterior tecnologización y la producción de bienes de consumo inmediato a bajo costo. El surgimiento de partidos agrícolas, de corte “campesino” no se hizo esperar, frente aquellos que cuya identidad giraba más en torno a banderas y discursos que enfatizaban el progreso de la sociedad con base en el desarrollo económico y la diversificación industrial.

4. Propietario – Trabajador ó Burguesía vs Obreros

Este es más que nada la formalización del clivaje de clase social, el cual establece dos clases sociales principales: Propietarios Vs Trabajadores o Burgueses Vs Obreros.

Según sea el contexto esta división adquirió matices distintos, principalmente respecto a los partidos políticos representantes de la clase trabajadora. No

*Tal es el caso de España, la ex Yugoslavia, Gran Bretaña e Irlanda del sur en el aspecto religioso y más recientemente el caso de América Latina, especialmente México con las demandas de autonomía de los grupos indígenas expresadas en el respeto a sus usos y costumbres, el autogobierno, y la autogestión.

obstante, se reconoce la existencia y coexistencia de diferentes partidos de clase y por lo tanto de identidades políticas distintas.

El contexto histórico en el que surgen estas divisorias o fisuras corresponden en el caso del conflicto Centro vs Periferia e Iglesia vs Estado, a los procesos de construcción de los estados – nación europeos y a la reforma protestante; mientras que la oposición Campo vs Industria y Burguesía vs Obreros responde a la Revolución Industrial.

Cuadro 1. Orígenes y Tipos de Clivajes.

| Determinante Histórico | Línea Divisoria | Clivaje |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Reforma Protestante | Católicos vs Protestantes Súbditos del Estado vs Súbditos de la Iglesia | Clivaje Religioso |
| Formación del Estado Nación | Centro Vs Periferia | Clivaje de Origen |
| Revolución Industrial | Terratenientes rurales vs Industriales Urbanos Burguesía vs Trabajadores | Clivaje de clase social |

Elaboración Propia. Fuente: Alan Ware (1996)

Lipset y Rokkan, fundamentan su propuesta en el análisis del sistema de partidos Europeo, en donde el término clivaje sirve, en este caso, para ilustrar la correlación existente entre la posición que el individuo ocupa en la estructura social y su identificación política con un partido, esto dependiendo de la línea de fractura que éste operando en cada contexto: clase social, su etnia, religión etc.

No obstante, la manifestación política de un clivaje, el que una identidad política se active, depende a su vez de distintos procesos tales como la politización, la movilización electoral y la democratización. En este sentido, para que un clivaje se constituya en un factor de influencia en la vida social, cultural y política (Bartolini y Mair, 1990: 218), debe contar con una base social y cultural que permita establecer la correlación entre la divisoria social principal y la presencia de determinadas identidades política.

De esta forma, las identidades partidistas dependen del tipo de partidos que existen, el sistema de partidos en una sociedad determinada depende en este caso del tipo de clivaje o clivajes, de una serie de conflictos surgidos a la luz de los procesos históricos o acontecimientos que permanecen congelados, ello explicaría la estabilidad en las preferencias político partidarias y consecuentemente la estabilidad electoral.

En suma, la identidad con un partido depende del tipo de conflicto que se haya suscitado, si se ha vivido en un contexto con un permanente conflicto de clase social, las identidades estarían articuladas en torno a la presencia de partidos que representen a la clase trabajadora y partidos que representen a la burguesía. En donde la compenetración o identidad resultante es conocida dentro de esta perspectiva como un alineamiento o por otro lado, si el conflicto es de carácter religioso el sistema de partidos resultante se articula en torno a las distintas denominaciones que haya conseguido organizarse de esta manera, por lo que la identidad política resultante es de esta misma naturaleza.

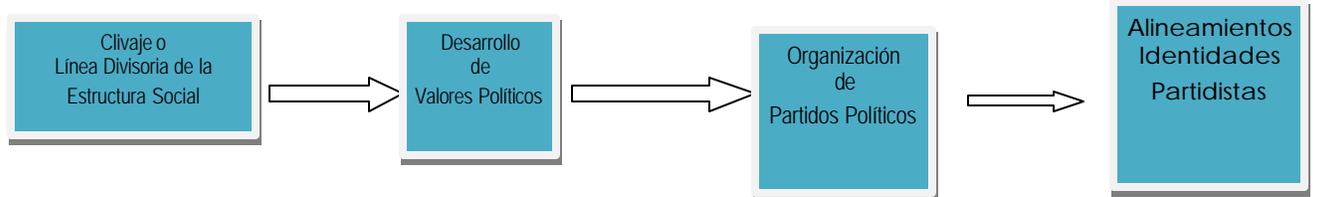
De esta manera, el clivaje es una división en la sociedad, una partición en bandos contrapuestos determinado por la posición de los individuos en la estructura social; lo cual termina por producir alineamientos entre los bandos que caracterizan a una sociedad y los partidos políticos. La división, es de carácter social, no de tipo ideológico o actitudinal, es independiente a la voluntad de los individuos. Para que el clivaje exista, éste debe ser una división profundamente arraigada entre los individuos que configura antes que una identificación política, una identificación social, el alineamiento se da en relación a un extremo de la división social y hacia el partido político correspondiente.

Para Bartolini y Mair (1990), para que el clivaje opere es necesario dos derivaciones no estructurales:

- 1) Una derivación normativa: que se expresa en un conjunto de valores contrapuestos que son defendidos por cada una de las partes en conflicto
- 2) Una derivación organizativa: Que implica la articulación institucional u organizacional de dichos valores a través de la creación de partidos políticos que serán los que los defiendan

Con ello los mecanismos causales, que provocan una identidad o alineamiento desde esta perspectiva quedan establecidos de la siguiente forma:

Gráfico 1. Mecanismos causales en la formación de preferencias partidarias: Clivajes Sociales.



Lo que nos muestra el gráfico es que la línea de causalidad se articula a través de una relación de mecanismos Macro – micro- Macro- Micro, que opera en un sentido en que las características sociales que son producto de los clivajes sociales determinan a través de un mecanismo intermedio que son los partidos políticos las identidades individuales. En este tipo de explicaciones, lo que se muestra respecto a las capacidades del individuo es que este cuenta con escasas o nulas alternativas entre las cuales elegir; su comportamiento expresa la introyección de normas sociales, hábitos, costumbres, rutinas, tradiciones o incluso rituales.

Es necesario mencionar que el funcionamiento de estos mecanismos como componentes dentro del proceso causal, conllevan también procesos causales de distinta índole: físicos, sociales o psicológicos los cuales, que al no ser observables pueden ocasionar que la cadena causal no se lleve a cabo, la influencia de los clivajes no es determinista sino probabilística; porque incluso puede ser el caso que muchas de las divisiones sociales existentes no sean o lleguen a ser políticamente relevantes, y por lo tanto no se produzca una serie de valores políticos que den forma a organizaciones como los partidos políticos ó que también ocurra tal y como Bartolini y Mair (1990) han mencionado que redes sociales, profesionales o de distinto se constituyan en la expresión de un clivaje social.

El enfoque de Lipset y Rokkan implica cierto determinismo social, sin embargo su planteamiento reconoce que las consideraciones estratégicas respecto a la organización partidaria y de grupos, la formación de coaliciones y la dinámica propia de las elecciones deben tomarse en cuenta, como factores exógenos en la creación o modificación de los clivajes previamente existentes. Al respecto, consideran la posibilidad de que los partidos por si mismos se erijan, en

determinados contextos y momentos, como polos de atracción autónomos; capaces de producir sus propios alineamientos independientemente del influjo del clivaje predominante (Lipset y Rokkan, 1967; Colomer, 2005).

No obstante, si bien Lipset y Rokkan reconocen que no existe una total rigidez en torno a la estabilidad propuesta de los alineamientos político-electorales, un cambio en el sistema de partidos y por lo tanto de las identidades o alineamientos existentes, de producirse, sería a través solo de grandes fluctuaciones. Aún con esta advertencia, la inferencia causal propuesta por la aproximación teórica, versa sobre una estabilidad de los alineamientos partidarios y consecuentemente del comportamiento electoral.

La posibilidad de que los clivajes se vean alterados en su naturaleza o incluso puedan producirse, condujo a desarrollos teóricos alternativos considerando a las líneas divisorias como variables dependientes o incluso intervinientes; en donde, por un lado, es posible la emergencia de nuevas coyunturas críticas, que conducirían a transformaciones sociales inesperadas; o por otro lado profundos cambios institucionales, principalmente en los sistemas electorales, crearían las condiciones necesarias para cambios significativos en los sistemas de partido y por lo tanto en la orientación de las alineaciones partidistas.

Sin embargo, recientes investigaciones han mostrado que la estructura social es poco significativa, entendiendo a esta como producto de coyunturas críticas, en la configuración de los alineamientos político-electorales. El declive de los clivajes como variable explicativa se vio acompañado por la emergencia de temas o issues de carácter estrictamente político que activados por los propios partidos se convierten en los determinantes principales del partidismo (Franklin, Mackie y Valen, 1992; Nie, Verba y Petrocik, 1981; Franklin, 1992)

Esta línea de investigación fue profundizada sobre todo en el contexto de democracias emergentes, cuya hipótesis versa en el sentido de que los procesos de formación de los clivajes son exógenos a las estrategias políticas de los líderes políticos y los partidos (Kitschelt, 1992,). Autores como Gunther (1986 y 1995), Gunther y Mughan (1993) Linz y Montero (1986), (Torcal y Chhibber, 1995) y Lijphart (1993), sostienen que en regímenes post-autoritarios el liderazgo y el diseño institucional de manera conjunta juegan un rol fundamental mitigando o

activando determinados conflictos políticos y sociales que se derivan de clivajes específicos.

En este sentido, una de las líneas de conflicto que presentan mayor activación, sobre todo en democracias emergentes es la divisoria de clase social, la cual se da la mayor de las veces para consolidar un segmento, un núcleo duro de individuos o electorado desmovilizado.

Sin embargo, desde el plano de la correlación existente entre posición de clase e identificación política con partidos de clase, la relación no es lineal; esto lo muestra la coexistencia en Europa de partidos socialdemócratas y comunistas, cuyas diferencias no pueden explicarse en función de diferencias de clase en sus apoyos o electorado (Paramio,1998), esto señala que la posición de clase configura un espectro político amplio en el cual pueden competir y converger identidades políticas distintas.

Un segundo aspecto concerniente a la relación posición de clase o divisoria de clase e identidad política es que son cambiantes en cuanto a peso e intensidad a lo largo del tiempo, para Abramson (1992) existiría una tendencia de debilitamiento de las identidades políticas en general y de identidades político-partidarias de clase en lo particular.

Existe la posibilidad de grandes realineamientos: la caída y emergencia respectivamente de nuevas identidades que demuestran la pérdida de peso de las divisorias sociales como variables explicativas de las identidades partidistas y de la conducta electoral (Burnham,1970 y Paramio, 1998).

La evidencia indica que la identificación partidaria determinada por las divisorias de clase no solo oscila en función de elecciones críticas (Key,1955) sino también en circunstancias coyunturales (Clarke y Suzuki, 1994) lo cual indica que es más plausible la explicación de la formación de las identidades partidistas a partir de la socialización y el aprendizaje (Converse, 1969) en ciertos contextos y situaciones, tal y como postula el llamado Modelo Michigan.

2. El Modelo Michigan

Como concepto, la identificación política con un partido o identidad partidista es desarrollado propiamente por cuatro investigadores de la Universidad de Michigan: Angus Campbell, Philip E. Converse, Warren Miller y Donald Stokes, en su obra *The American Voter*, la identidad partidista es la orientación individual de tipo afectivo hacia un importante grupo-objeto en su ambiente (Campbell et.,al. 1960: 121). El interés principal con la acuñación de este concepto, es explicar el origen de la estabilidad de las preferencias electorales, en un contexto distinto al europeo (Barnes, 1997: 126).

A diferencia del planteamiento de Lipset y Rokkan, una primera distinción metodológica, es que el análisis de las identidades se traslada a un plano micro – macro, es decir se efectúa una exposición distinta de la forma en que se concatenan distintos mecanismos causales que explicarían la formación de una identidad partidista.

En este sentido, si antes se postulaba que las actitudes políticas se vinculan a la clase social, la religión, la etnia etc; en el planteamiento Michigan, estas características se asumen como parte integral de la composición de las identidades partidistas, esto siempre y cuando los factores sociológicos tengan relevancia para explicar el voto.

La relación se invierte y en principio la identidad partidista se coloca en el lugar, que ocupaba en el embudo de la causalidad, los clivajes sociales; las identidades partidistas son vistas como un concepto que encapsula los distintos factores sociológicos, los cuales a diferencia del planteamiento anterior, dejan de ocupar su lugar como variables independientes.

La identidad partidista es un concepto que se deriva de la teoría de los grupos de referencia, la cual a su vez deriva de la teoría de la identidad social, en ella se postula que el sentido del yo ésta asociado a un sentimiento de identidad hacia un grupo o grupos entre los que se pueden incluir los partidos políticos. En este sentido, la identidad partidista provee un marco de significación y de estructuración del mundo en que el individuo se desenvuelve, tiene una significancia emocional vinculada pues a una membrecía de grupo (Tajfel 1978) y

Greene 2004), brinda una respuesta respecto quién soy respecto al otro, en qué creo frente a que creen los demás etc.

Esta aproximación estuvo fuertemente sustentada metodológicamente, al establecer la encuesta como una herramienta que permitiría aproximarse a las características sociales y actitudinales de los individuos a través del tiempo y de forma constante¹.

De esta forma la identidad partidista como principal determinante del voto no se concibe como un acto discreto de una sola elección, sino como un proceso dinámico que se reitera a lo largo del tiempo, con la encuesta como instrumento y usando preguntas de carácter retrospectivo se indaga respecto a la niñez y las experiencias formativas de los individuos.

Esto fundamenta la propuesta teórica de que el partidismo se adquiere en primera instancia por la pertenencia a la familia y posteriormente puede ser afectado por otro tipo de relaciones y vínculos sociales que la persona establece a lo largo de su vida (Miller, 1986).

De esta forma la vinculación afectiva con un partido se desarrolla mediante un proceso de socialización que se lleva a cabo durante la infancia y adolescencia de las personas; en dicho proceso los individuos adoptan las actitudes y los valores de sus padres, de su familia en general, de sus pares, en la escuela, la iglesia, el barrio etc., para finalmente inclinarse hacia alguno de los partidos existentes en el contexto en el cual viven; por lo tanto la identidad partidista se constituye en el principal punto de referencia.

Los principios básicos y no menos controversiales del modelo psicosociológico y también llamado modelo Michigan, se pueden sistematizar en cinco axiomas o proposiciones:

- 1) La mayoría de los electores sienten una lealtad basada en una orientación afectiva heredada de la familia.
- 2) La función de la identidad partidista es permitir al elector lidiar con la información política y decidir por cual partido votar. De esta manera, la identidad

¹ Desde 1948 en que los investigadores de Michigan comenzaron a trabajar, la denominada US National Elections, a través de las encuestas ha suministrado abundante información sobre las características de los votantes en cada elección.

partidista afecta la orientación del voto directa e indirectamente a través la influencia que genera en las percepciones de las políticas públicas, de los candidatos y de los vínculos con los grupos sociales.

3) La identificación partidista se fortalece a lo largo del tiempo y si se ve alterada los cambios en su orientación son a nivel personal, con excepción en períodos de realineamiento, y se deben a alteraciones en las membresías de grupo asociadas a una movilidad geográfica o social del individuo

4) Los electores que son influenciados por las fuerzas, temas o aspectos de corto plazo que entran juego en una campaña electoral y que por lo mismo votan en contra del partido con el cual se identifican, siguen conservando su orientación partidista y en la siguiente elección retornan a votar por su partido lo que es denominado “*tendencia al hogar*”.

5) La distribución del partidismo en el electorado provee una base desde la cual calcular el voto normal o resultado esperado, si es que los factores de corto plazo no inciden en favorecer a un partido determinado. Los cambios o realineamientos que transforman el voto normal, ocurren pero no frecuentemente (Harrop y Miller: 133-134).

Determinar el grado de influencia de la identidad con un partido dependió de una selección de los factores que potencialmente explicarían la decisión electoral, del diseño de una tipología en que se distinguen distintos mecanismos que articular lo que ellos denominan el embudo de la causalidad (*funnel of causality*) en donde se distinguen las fuerzas que crean disposiciones de largo plazo: como la familia, la escuela, que moldean y dan lugar al partidismo y las fuerzas de corto plazo, coyunturales, circunscritas incluso a un espacio y tiempo, como la situación económica, las campañas políticas, los issues o temas de mayor relevancia.

Las fuerzas disposicionales son diversas y constituyen las creencias previas, las actitudes y los valores de los individuos cuando se enfrentan por ejemplo a la decisión electoral; al respecto uno de los principales hallazgos del modelo Michigan es que la identificación partidista se erige en la fuerza más importante de largo plazo, aún por encima de la ideología, la religión, la clase social, etc.

En principio, las lealtades partidistas son consideradas con mayor influencia porque, tal y como se mencionó líneas arriba, estas son la expresión de los

principales clivajes o divisorias existentes en una sociedad determinada, estas se encuentran contenidas dentro del partidismo.

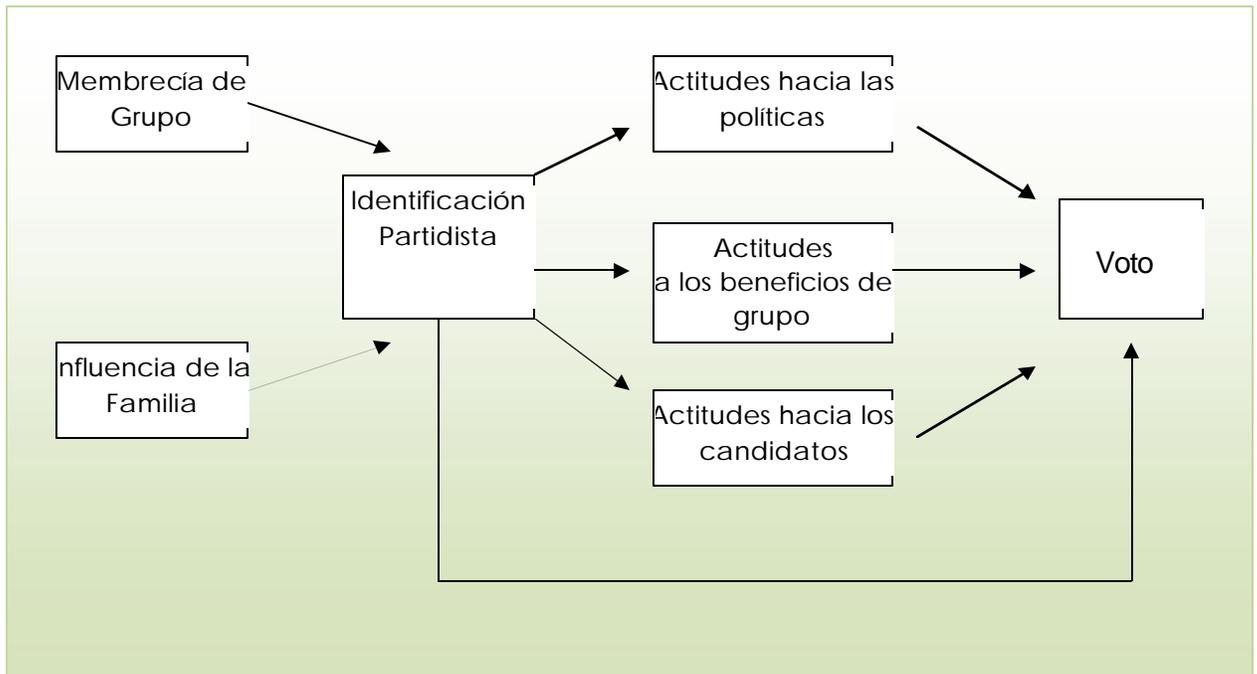
Respecto a la ideología, ésta es conceptualizada en el modelo Michigan primero como un sistema de creencias que conducen a una orientación ya sea liberal o conservadora hacia distintos objetos políticos, y en segundo lugar como una serie de actitudes enlazadas o vinculadas a un común denominador sin que necesariamente respondan a principios abstractos determinados, sin embargo la ideología no llega a explicar más que una porción mínima del voto (Campbell, et.al., 1960: 249), la búsqueda de la existencia empírica de una disputa entre ideologías contrapuestas como un hecho constante, como factor decisivo de la decisión electoral no es del todo significativa.

Tal y como los autores de *The American Voter* lo afirman: “Un análisis ideológico sólo es posible para un pequeño segmento de la población que se encuentra equipada para aproximarse o tomar una decisión política con este nivel de complejidad” (Campbell, et.al.: 250). Finalmente, Campbell y compañía indagaron respecto a la fuerza del llamado voto por temas (issue voting) o también llamado voto por políticas (policy voting); los requisitos que ellos determinaron para ponderar su fuerza fueron: 1) la existencia de un conocimiento sobre el tema en cuestión, 2) la presencia de un sentimiento de intensidad al respecto y 3) la percepción de que un partido representa mejor las posiciones individuales respecto al tema que otro.

Los resultados mostraban que solo el 36% de la muestra cumplimentaban los requisitos, se evidenciaba una vinculación imperfecta entre el voto por temas y el voto.

Estos hallazgos colocaron a la identidad partidista como la disposición de largo plazo de mayor fuerza que, fomentada desde una edad temprana se convierte en un anclaje psicológico que permanece con el individuo para toda su vida. Se asume que la identidad partidista se forma antes que cualquier conocimiento sobre temas específicos o el desarrollo de una ideología, por lo que establece una influencia causal del partido sobre las posiciones individuales y la ideología.

Gráfico 2. Mecanismos causales formación de la identidad partidista: Modelo Michigan



Fuente: Harrop y Miller (1987: 132)

La esencia del Modelo Michigan es una identidad partidista que producto de la socialización se constituye en la principal fuerza de largo plazo de elección a elección. La relación que se muestra es que existe una transmisión de la identificación con un partido de los padres hacia los hijos, con una influencia significativa de la pertenencia a ciertos grupos.

El papel que juega la familia se inserta en lo que se denomina proceso de socialización primaria, su influencia puede ser de forma directa en donde se enfatiza la importancia de compartir y preservar ciertos valores, o indirecta a través de la transmisión de cierto tipo de actitudes². Trabajos como el de Russell Dalton (1996: 201) muestran por ejemplo la fuerza de la transmisión ideológica-partidaria por medio del entorno familiar, por su parte el estudio de Aberbach, Putnam y Rockman (1981) en seis países (Francia, Reino Unido, Alemania, Italia,

² Al respecto queda de manifiesto la importancia de este último tipo de influencia en el trabajo de Gabriel Almond y Sydney Verba (1963) en donde se señala que la eficacia política está relacionada con el papel activo que los individuos desempeñaron cuando niños al interior de su familia; es decir tenían mayor confianza y conciencia de que sus acciones políticas e ideas pudieran influir en las decisiones de gobierno. Véase Gabriel A. Almond y Sydney Verba. "The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations", Princeton University Press, Princeton, 1963.

Holanda y Estados Unidos) ofrece evidencia sobre la influencia de la familia en la socialización política de la burocracia y los políticos y por otro lado el trabajo de Michael Genovese (1994) sobre el origen del liderazgo, señala que esta cualidad esta intrínsecamente ligada a entornos familiares en donde, los padres esperaban mucho de las mujeres por lo que se creaban las condiciones materiales y emocionales para que su hija trascendiera estereotipos sociales.

De esta manera, la socialización primaria o también llamada socialización familiar es uno de los factores que a la par de ciertas condiciones sociales, determinan al partidismo como una fuerza de largo plazo, duradera en el tiempo. Los valores políticos fundamentales introyectados durante este proceso se suelen, la mayoría de las veces, consolidar y solidificar a lo largo del tiempo, manteniendo una notable estabilidad (Jennings y Niemi, 1981).

Por otro lado, sumado al poder de la familia, el segundo agente de socialización en importancia es la escuela; este agente no sólo refuerza aquellos valores generados en la socialización primaria; sino que integra junto con los medios de comunicación y la interacción en la comunidad y la membrecía a grupos, el proceso de socialización secundaria.

En el caso específico de la escuela, el impacto puede ser indirecto en el sentido de que hay un grado de asociación entre los conocimientos políticos poseídos y el grado de escolaridad; al respecto Gabriel Almond y Sidney Verba mostraban en *The Civic Culture* (1963) que el número de años en la escuela incidía en la idea que tenía el ciudadano sobre ser más activo en su rol dentro de la comunidad en que se encontraba.

El ideario concreto que tiene la institución educativa es transmitido directamente a los que producto del azar o por convicción propia se encuentran inscritos en un colegio determinado. El contenido de los programas de estudio, las normas y la estructura jerárquica que otorgan identidad a la escuela tienen una impronta a la larga en las convicciones y actitudes que el individuo ostenta en su accionar público.

En la cadena de causación, el hecho de identificarse con un partido político influye sobre la evaluación de los candidatos, de los temas en liza, las políticas, etc, esto finalmente repercutirá en el sentido del voto, el último eslabón en esta cadena

causal cuyo origen se encuentra en la socialización que se lleva a cabo en la familia, la escuela, etc.

Definida como una orientación de tipo afectivo la identidad partidista ofrece por sí misma, desde esta perspectiva, suficientes elementos para votar por un partido. Su conformación es tan sólida que la persona no necesita contar con un conocimiento profundo de las políticas del partido, su organización o incluso militar activamente en él, haciendo nuevamente una analogía en la afinidad religiosa, el individuo simplemente deposita su fe en el partido político con el cual se identifica.

En suma, el proceso de socialización e indirectamente el contexto en el cual el individuo se desenvuelve, provee una predisposición psicológico-afectiva de largo plazo hacia un partido político.

El modelo Michigan apuesta por la estabilidad de las preferencias electorales, vía la identidad partidista, para Riker (1997) la teoría es producto de su tiempo, de una presencia de una fuerte estabilidad en el voto que comienza a principios de los años treinta y se extiende hasta 1964, marcado únicamente por dos elecciones críticas – principalmente la realizada después de la gran Depresión -, que producirían realineamientos electorales (Fiorina, 1997).

Sin embargo, hoy es imposible no pensar a la identidad partidista como un dato cambiante y muchas veces profundamente inestable, en donde los factores de corto plazo: imagen y evaluación de los candidatos, el carácter de las campañas y principalmente el desempeño de los gobiernos, el ejercicio de la representación política, se convierten en variables independientes, cambian su lugar en el embudo de la causalidad, lo cual impacta, si bien no de manera frecuente, en la identidad partidista en los niveles de partidismo y finalmente en las preferencias electorales. Esto implica un cambio en la concepción del individuo y su manera de funcionar en una democracia. Introducir en la ecuación el desempeño de los gobiernos, principalmente su desempeño económico, provoca colocar en el centro del análisis la racionalidad de un individuo capaz de evaluar y decidir sus preferencias políticas. Es reconocer que existe o puede existir una intencionalidad, más allá de su carácter instrumental o no, como fundamento de la lealtad a un partido político. La identidad partidista pasa a ocupar una posición endógena en la concatenación causal. Esto se aborda con mayor profundidad en el siguiente apartado.

3. Racionalidad, Desempeño y Partidismo

El modelo Michigan se construye sobre una concepción del individuo que es incapaz de evaluar, racionalmente las acciones de gobierno; conoce poco sobre las políticas sobre sus resultados, su origen etc., planteamiento coincide con la propuesta teórica de los clivajes sociales como determinantes de las actitudes políticas. Con el modelo Michigan se derrumba, en principio, el mito del individuo/votante informado que supuestamente constituía un prerrequisito de la democracia ilustrada (Converse, 1964). En su lugar se afirma que estamos ante un votante cognitivamente imposibilitado, incapaz de organizar y entender los asuntos políticos que le rodean y dependiente de una elite politizada, más educada e informada (Jones, 2001: 78).

A partir de la publicación de *The American Voter*, la subsiguiente serie de estudios sobre comportamiento político han tenido que dialogar académicamente con sus postulados; ya sea intentando reformularlos desde este mismo encuadre teórico o refutarlos desde planteamientos alternativos sobre la forma en que los ciudadanos funcionan en una democracia y principalmente se adhieren políticamente.

La identificación partidista se ha consolidado como un concepto del todo significativo empírica y normativamente, con implicaciones sustanciales para la teoría política democrática, tal y como ésta ha tomado forma a partir de la publicación de la obra de Anthony Downs: *An Economic Theory of Democracy (1957)*, o Teoría Económica de la Democracia. En este trabajo se inicia una serie de críticas al modelo Michigan, sobre la concepción de un individuo incapaz de funcionar racionalmente en una democracia.

Estas críticas se sustentaban en evidencia empírica que mostraba que la presencia del voto por temas, *issue voting*, era más importante de lo que el modelo de la identidad partidista proponía (Repass, 1971). Por otra parte, los análisis de las campañas electorales, que se llevaron a cabo en la década de los sesenta en los Estados Unidos, demostraron que las lealtades partidistas y las preferencias estaban sujetas al impacto de los elementos contextuales (Pomper, 1972)

Concretamente en la obra de Downs, se introduce la visión del individuo en tanto votante, como un ente racional; capaz de efectuar una elección sobre la base de

comparar el grado de utilidad que cada uno de las opciones políticas ofrece y sobre lo que él espera obtener, y sobre todo el costo que conlleva emitir su voto.

Con *Teoría Económica de la Democracia*, se inaugura propiamente la concepción económica del votante o en otras palabras la aplicación de los supuestos de la racionalidad económica a la esfera política.

De esta forma, los individuos evalúan los programas de la oposición y el desempeño del partido en el gobierno para formarse sus expectativas de utilidad lo cual sumado al costo asociado a los recursos necesarios para informarse acerca de los temas o *issues* de la elección, los candidatos y los partidos en competencia, la persona calcula la viabilidad logística, en tiempo y desplazamiento, para trasladarse al lugar de la votación al tiempo que evalúa las implicaciones que tendrá su sufragio individual en el resultado final.

Desde la concepción económica del votante, no se acepta que el individuo no tenga la capacidad suficiente para funcionar en una democracia; por el contrario si el grado de información con el que cuentan, conlleva un alto costo es perfectamente racional que los individuos confíen en la información escasa que obtienen de los partidos; de los temas de campaña; los candidatos y la acción previa del gobierno así como de las políticas que se piensan llevar a cabo.

En suma si todos tienen la posibilidad de acceder a un nivel de información con el bemol de que su adquisición es costosa sólo es racional conseguir una unidad adicional de información si la utilidad esperada es superior a sus costes. En este sentido los votantes no están cognitivamente incapacitados, sino que son racionalmente ignorantes (Dalton y Wattenberg, 1993, Fiorina, 1997, Green y Shapiro, 1994).

Desde este enfoque se postula que, si la utilidad esperada del voto individual incida en el resultado es casi nula, las personas desde la perspectiva de Downs, tendrían motivos para no participar. Sin embargo lo hacen lo cual conduce a lo que se ha denominado la paradoja del voto.

La solución de esta paradoja provino de desarrollos posteriores en este mismo encuadre teórico y consiste en que por un lado 1) los costos para participar pueden reducirse cuando hay facilidades para ello y 2) la gente también vota porque obtiene una satisfacción de tipo expresivo que consiste en que al momento de

sufragar, los individuos expresan y reafirman su identificación con los principios democráticos, con la democracia en sí, y también con el partido político de su elección (Riker y Ordeshook, 1991).

La solución a la paradoja del voto considera de nuevo a la identidad partidista como una variable explicativa de la participación electoral pero lleva su estudio más allá de los planteamientos iniciales. Sin la identificación política, la democracia no puede funcionar (Paramio, 1998), sin niveles de identificación partidista – cualesquiera que sean - , sería muy difícil que los mecanismos de representación se articulen.

De esta forma, si bien, la hipótesis de Converse y compañía sobre la importancia de la socialización como origen del partidismo no debe dejarse de lado, partiendo del hecho de que el que vota por primera vez, habiendo crecido en un medio en el que un partido aparece como la opción política natural se incline hacia ese partido como primera opción (Paramio,1998).

Hoy en día el proceso de socialización ha perdido peso como el mecanismo principal de formación de las identidades partidarias, sobre todo en sociedades urbanas, diversificadas en términos partidarios, que cuentan con una mayor grado de información acerca de las acciones del gobierno, con mayores niveles de educación, influjo de diversos grupos y organizaciones, medios de comunicación etc.

Esto conlleva, considerar con mayor profundidad las propiedades y origen de la identidad partidista desde una premisa que considera el funcionamiento de la ciudadanía en general y la formación de las identidades políticas en particular, basada en individuos intencionados e instrumentalmente motivados (Carmines y Huckfeldt, 2001: 331). En este sentido, en la formación de las identidades se postula que: 1) los constreñimientos sociales e institucionales determinan parcialmente las acciones sociales de los individuos y 2) los individuos eligen cursos de acción que consideran les producirá algún beneficio personal.

Desde la teoría de la elección racional, la conceptualización que se hizo de la identidad partidista es de un dispositivo que sirve para economizar información (Downs, 1957; Goldberg,1969; Robertson, 1976; Shively, 1979), pero el que cuestionó con mayor fuerza desde esta corriente la orientación puramente afectiva

producto de la socialización, fue Morris P. Fiorina con su trabajo: *Retrospective Voting in American National Elections (1981)*.

El autor puso particular énfasis a los factores cognitivos y a las evaluaciones retrospectivas del gobierno como los factores formativos de la identidad partidista. Para Fiorina la identidad partidista debía conceptualizarse como una suma continua del desempeño previo de los partidos; en esta definición subyace la importancia del procesamiento individual de la información, la capacidad que tiene un individuo que es racional para evaluar el desempeño del gobierno y decantarse políticamente hacia alguna de las opciones políticas que se encuentran en disputa. La obra de Fiorina es un primer intento de conciliar los postulados de racionalidad del trabajo de Anthony Downs con una propiedad característica de la identidad partidista: su estabilidad. En este sentido, para Fiorina los sucesos externos tienen una influencia mayor de lo que se piensa en la identidad partidista, y esto debido a la capacidad del individuo de procesar la información disponible en su ambiente. La capacidad individual de procesar la información constituiría, desde la óptica de Fiorina, una explicación tanto de la estabilidad como del cambio en las lealtades partidistas; por un lado la estabilidad o resistencia al cambio de las identidades la explicaría una selectividad en la búsqueda de información en el sentido de que esta refuerce sus creencias.

El sujeto desde una exposición inicial al cúmulo de información; en la atención brindada, la validación y su recuerdo busca a toda costa evitar una disonancia cognoscitiva (Festinger, 1957) con lo que él cree previamente.

Sin embargo, acontecimientos sumamente críticos como un desempeño de gobierno inusitado, sea este positivo o negativo, pueden producir cambios importantes en los niveles de identidad.

Dado que los acontecimientos que producen un cambio son inéditos, la selectividad en el procesamiento de la información juega un papel importante para fortalecer a lo largo del tiempo los patrones de identidad.

Por otro parte, se postulan fuera del ámbito de socialización, diferentes marcos de interacción social que le proveen al individuo distintos grupos de referencia que le ayudan, en función de su pertenencia, a sustentar su elección o cambiarla si es que

en su devenir decide en un momento determinado mutar de grupo de referencia, en este caso un partido político.

La propuesta de Fiorina establece un grado de racionalidad en la formación, estabilidad y cambio en el partidismo, al tiempo que reconoce la importancia de los grupos de referencia, sin que esto implique un grado de exclusividad de la familia como único grupo de referencia.

Con el reconocimiento de la capacidad individual de procesar la información sobre los distintos aspectos de índole político que le rodean, se dio un primer acercamiento al papel fundamental que juega la direccionalidad e intencionalidad de las políticas en la conformación de patrones estables de partidismo, esto a la par de la influencia que aún tiene los grupos de referencia, no circunscritos únicamente a la familia.

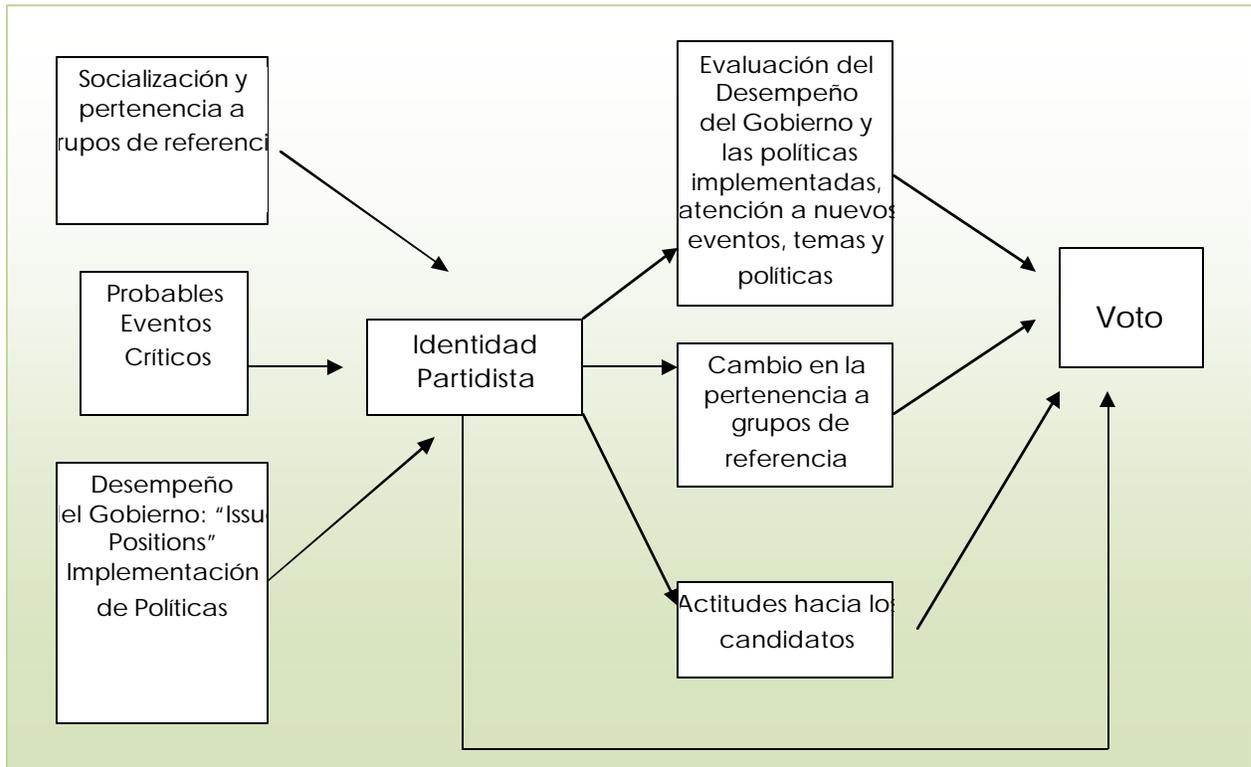
De esta manera, el punto a destacar, para efectos de este trabajo, es el rol que juega la racionalidad individual como el principal mecanismo causal en la formación del partidismo.

Esto implica modificar el túnel de la causalidad propuesto por el modelo Michigan, colocar en la antesala los factores de corto plazo, como elementos que promueven o fomentan una evaluación individual, racional, dirigida a elegir el mejor curso de acción posible.

Para la llamada escuela revisionista encabezada por Morris Fiorina, la identidad partidista es concebida como una variable endógena afectada por los factores tanto de corto como de largo plazo: fluctuaciones económicas, inclinaciones ideológicas, temas específicos o issue positions, el desempeño del gobierno y en tiempo de elecciones el perfil y desempeño del candidato.

En este sentido, para Niemi y Weisberg “la identificación partidista varía .. a pesar de que uno crea que permanece estable, nadie puede argumentar que no cambia en lo absoluto, ya sea a nivel individual o a nivel agregado y estos cambios tienen que ver con la dinámica política como con las circunstancias económicas, y no solo debido a la socialización temprana”(2001: 334)

Gráfico 3. Mecanismos Causales en la Formación del Partidismo: Modelo Revisionista



De acuerdo a Sören Holmberg la propuesta revisionista o racional/instrumental, sigue reconociendo que la identidad partidista crea un tipo de pantalla perceptual y ayuda a los individuos a organizar su visión del mundo; en ello concuerdan Sniderman, Brody y Tetlock (1991), Rahn (1993) y Brader y Stucker (2001), en donde las lealtades partidistas estructuran la percepción y las actitudes hacia el cuerpo político. No obstante, tal y como lo ilustra el gráfico 3, existe una causación recíproca, la identidad partidista determina comportamientos, actitudes y percepciones y al mismo tiempo el partidismo es influenciado por comportamientos, percepciones y evaluaciones. Estamos ante un problema del vaso lleno o del vaso medio vacío, según la perspectiva de análisis que se adopte.

Al respecto existen distintas visiones que reconociendo este doble proceso de causación lo utilizan para fundamentar sus propuestas: trabajos como el de Schmitt y Holmberg (1995) destacan los distintos factores que articulan la competencia política como influencias directas del partidismo, otros trabajos

postulan que la modernización y la movilización cognitiva hace menos funcional la identidad partidista, lo cual explicaría el declive del partidismo en las democracias occidentales (Shively, 1979; Dalton, 1984; Dalton y Wattenberg, 2000).

Esta visión coloca a la política al final del embudo de la causalidad y al ponderar el desarrollo y la modernización de la sociedad pondera los factores sociológicos como determinantes estructurales de actitudes y creencias políticas mayormente informadas

Los planteamientos anteriores, han dialogado directamente con el concepto de la identidad partidista creado por los autores de *The American Voter*. Para los creadores del modelo Michigan, la identidad partidista se constituyó en una variable dotada de sentido a través de una contrastación empírica que logró dar cuenta de una orientación o relación afectiva entre los individuos y los partidos políticos.

Los niveles de información sobre los asuntos políticos; la dimensión política en sí, las consideraciones retrospectivas no estaban llamados a ocupar un lugar prominente como mecanismos causales en la explicación del partidismo.

Sin embargo, como se ha podido observar numerosos investigadores comenzaron a incluirlas en planteamientos posteriores y diversos problemas emergieron respecto a lo que estarían primando en un momento determinado en la formación de la identidad partidista.

Mientras que Campbell y sus colegas veían una variable estable, de naturaleza afectiva, una identidad partidista como un factor exógeno que explicaba diversas actitudes, percepciones, creencias en torno a lo político y sobre todo el voto, Morris Fiorina y la corriente revisionista, principalmente concebían la identidad partidista como una variable endógena, volátil causada o producida por consideraciones retrospectivas fundamentadas en una evaluación racional del entorno y los resultados políticos.

Finalmente, una de las aportaciones fundamentales de la escuela revisionista fue que al modificar la posición de la identidad partidista en el embudo de la causalidad, transformaron un concepto de naturaleza afectiva en uno de carácter político; basado en la cognición y la racionalidad individual como motor principal.

Esto de acuerdo a Holmberg (2007) refiere a dos diferentes nociones teóricas que a su juicio deben ser medidas y contrastadas de manera separada. Para Holmberg debe especificarse lo que se está analizando y tratando de medir ya sea un concepto centrado en relaciones afectivas producto de la socialización u otro basado en una evaluación racional; el primero debe denominarse identificación partidista, mientras que el segundo debería ser denominado como partidismo.

Como conceptualizar y medir el partidismo entendiendo la variable desde el punto de vista de los revisionistas conlleva un amplio abanico de posibilidades, pero sin duda alguna la cuestión del desempeño del gobierno, su impacto, las políticas implementadas se erigen sin lugar a dudas en las variables explicativas por excelencia.

4.- Partidismo Racional, Ejercicio de Gobierno y Representación Política.

En 1986 Adam Przeworski y John Sprague presentaron evidencia empírica sobre la formación de la identidad partidista en doce países socialistas, el análisis que comprendió la recopilación de información para el período de un siglo mostraba que el partidismo respondía más a símbolos de identificación que a la oferta de políticas económicas. El trabajo de estos autores demostró que la identidad partidista no podía ser reconducida sin más a la elección entre políticas económicas alternativas; sin embargo el trabajo si reconocía la importancia de los partidos políticos como agentes de acción política, como variables fundamentales en la formación de las clases sociales.

Al respecto, ¿cuál es el papel que fungen los modelos o estrategias de representación en la construcción de identidades político partidarias?

En principio el modelo de representación que ha primado en el grueso de las democracias consolidadas el cual se basa en una lógica de distribución y provisión de bienes públicos de índole programática se ha denominado *Modelo de Gobierno de Partido Responsable* o por su acepción en inglés *Responsible Party- Model (RPM)*. Este es el esquema sobre el cual Morris Fiorina, realiza su análisis sobre el impacto de las evaluaciones retrospectivas del desempeño del gobierno en la identificación partidista.

En este modelo los individuos seleccionan partidos en función de sus preferencias programáticas; las cuales al ser implementadas generan las condiciones de evaluación retrospectiva que, al generar una rendición de cuentas intertemporal, impactarían en este caso en los niveles de partidismo.

El Modelo de gobierno de partido responsable son los partidos políticos los principales vehículos que articulan las creencias de los individuos sobre distintas problemáticas y que las transforman en políticas públicas.

El RPM ha inspirado extensa teorización acerca de las condiciones que hacen posible a los individuos seleccionar partidos que representen sus creencias sobre políticas y partidos que , en el seno del Congreso en este caso, representen sus demandas (Dalton, 1985; Powell, 1982).

En este sentido al igual que otros modelos, el RPM postula que son tres los requerimientos relativos al comportamiento de los individuos y de los partidos políticos; los necesarios para que un esquema de representación programática se lleve a cabo en su dimensión de receptividad es decir: de transformación de las creencias y preferencias ciudadanas en políticas públicas y en su dimensión de rendición de cuentas, que no es otra cosa que las condiciones necesarias para que los representados a través de las elecciones sancionen de forma positiva o negativa el ejercicio de gobierno³.

1) Divergencia entre las políticas preferidas por los partidos políticos.

Los individuos hacen una elección significativa sobre la base de una oferta diversa de los partidos políticos en materia de políticas públicas. Sin esta oferta diversa o divergencia entre las políticas, los individuos tienen pocas oportunidades de influir en las políticas de gobierno a través de sus votos.

Si no existiera esta divergencia entre los partidos una franja considerable del electorado no encontraría atractivo el votar, es la diferencia de propuestas acerca de un futuro desempeño del gobierno el que permite la convergencia de las políticas propuestas y las preferencias individuales.

2) Estabilidad intertemporal en las preferencias partidarias.

Los partidos deben presentar políticas que sean razonablemente estables a lo largo del tiempo, cambios drásticos confunden al electorado acerca de lo que el partido estaría defendiendo, lo cual le impide influenciar con su voto las políticas de gobierno. Por otro lado, aun cuando los individuos puedan estar lo suficientemente bien informados de las políticas coyunturales de los partidos, paradójicamente esto implica que ellos perciban la dificultad de traducir sus propias preferencias en votos si al mismo tiempo perciben una alta probabilidad de que los partidos cambien sus posturas políticas.

3) Voto de los electores basado en preferencias programáticas.

Los individuos basan sus decisiones con base en una evaluación comparativa de las políticas de los partidos en competencia, esto con la intención de influir en los

³ Para una discusión más amplia sobre las distintas dimensiones de la representación política, véase Hanna Pitkin. "El concepto de Representación", Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985, pp. 283

resultados del gobierno. Si no existe un voto sobre las políticas y la oferta programática de los partidos, los resultados no estarían expresando un referéndum sobre las distintas visiones político-programáticas que los partidos están proponiendo.

De esta forma, si el voto no se da sobre consideraciones político-programáticas, no se puede esperar una convergencia entre lo que los partidos proponen y las creencias de su coalición de apoyo, si esto sucede el vínculo programático que apuntala el modelo de gobierno de partido responsable se pone en peligro.

Lo que subyace en este modelo de representación es una estrategia de vinculación, distribución y agregación de demandas que no se refiere a bienes particulares o privados, sino a la provisión de bienes públicos para una generalidad. En donde las demandas de los individuos hay que agregarlas, delimitar las preferencias comunes y actuar en consecuencia.

La representación programática conlleva una distribución que apela a categorías abstractas y generales pero sobretodo produce una estructura de competencia en donde lo que se pone a una consideración retrospectiva son fundamentalmente los resultados macroeconómicos.

El marco del funcionamiento de este modelo de representación; es la política macroeconómica la que posibilita evaluar la competencia del gobierno como un todo (Dorussen y Palmer, 2002, Gramacho, 2006), esto en la medida en que las personas sean capaces de atribuir claramente la responsabilidad de un buen o mal desempeño; la distancia ideológica entre los partidos sea reducida y existan las condiciones institucionales de participación y oposición enumeradas en su momento por Robert Dalh (1996).

En este sentido, el análisis del impacto de la política económica sobre el voto en lo general y la identidad partidista en lo particular, se ha guiado sobre la base principalmente de la *incumbency-oriented hypothesis* (IOH) y en menor medida de la *policy-oriented hypothesis* (POH); hipótesis que han puesto un énfasis distinto al efecto de las políticas en el ciclo político-electoral y a la forma en que los individuos llevan a cabo la evaluación correspondiente del desempeño gubernamental (Carcoglu, 1995; Powell y Whitten, 1993; Whitten y Palmer, 1999).

Para la *incumbency-oriented hypothesis* en la evaluación sobre el desempeño que hacen los individuos, no se toma en cuenta el perfil ideológico del gobierno; por lo que se apuesta a que los efectos de la macroeconomía son uniformes en el electorado; es decir si el desempeño es favorable en el próximo ciclo electoral el partido en el gobierno es sancionado con la ratificación del partido y/o la reelección del gobierno en turno; si la situación es contraria es penalizado y los votos son a favor de la oposición (Monroe, 1979; Paldam, 1981; Lewis-Beck y Belluci, 1982; Alesina, Londregan y Rosenthal 1993; Belluci 1984; Erikson, 1989, Leithner, 1991).

En este sentido, es menester mencionar que, si bien el partido en el gobierno es el beneficiario de un buen desempeño, en términos operativos queda claro en la mayoría de estos trabajos que, dado el control que tiene de las variables presupuestarias, el principal referente de evaluación y atribución de responsabilidad que tienen los individuos es el Poder Ejecutivo en cualquiera de sus formas (Presidencial o Parlamentario) y a cualquier nivel (nacional o subnacional).

Esto abre la posibilidad, la cual se tiene en cuenta en el análisis, que los recursos públicos puedan ser utilizados de forma estratégica de acuerdo el ciclo electoral correspondiente con la finalidad de ampliar las oportunidades de ratificación (Blaos y Nadreu, 1992; Díaz de Serralde, 1999 y Lago y Lago, 2001).

En contraparte, la *policy-oriented hypothesis* postula que el ejercicio de gobierno carece de neutralidad política en la regulación de la vida económica; los partidos políticos según su adscripción ideológica, tienen distintas competencias y prioridades en la configuración de las políticas económicas del Estado y estas son ampliamente reconocidas por los individuos en tanto votantes.

De esta forma, los intereses particulares que tienen los partidos políticos en la configuración de la política económica, tienen un reflejo en la conformación de coaliciones políticas que son respaldadas o en su defecto rechazadas por sectores específicos de la sociedad, lo cual tendrá un reflejo en la representación en el Congreso y/o el Poder Ejecutivo; es sobre esta hipótesis que han desarrollado la serie de trabajos sobre los ciclos económico-políticos (Nordhaus, 1975; Alesina 1988; Alesina y Rosenthal 1992; Hibbs, 1992; Lange y Garret, 1985; Hall 1986 y Boix 1996) que han demostrado que las políticas implementadas por los partidos políticos, están en estrecha relación con la utilidad que estas reporten a nivel electoral.

Si bien estas dos premisas de análisis han sido ya exploradas para explicar el cambio en las preferencias políticas en México, especialmente el impacto de las evaluaciones retrospectivas sobre el desempeño del gobierno en el voto (véase por ejemplo: Buendía, 2000; Beltrán, 2000 y 2003; Cinta 1999; Magaloni, 1999; Poiré, 1999 y 2000 y Morgenstern y Zechmeister 2001), considero que una adopción literal de las mismas, choca de frente con la específica capacidad de respuesta, que los partidos en el gobierno han tenido a las preferencias de sus ciudadanos, en América Latina y México en particular; lo cual sin duda conlleva una comprensión distinta de la forma en que el desempeño gubernamental impacta sobre el partidismo.

El *RPM* bajo el cual surge y se aplica tanto la IOH y la POH es un esquema de representación propio de una democracia consolidada con un alto grado de institucionalización partidaria, que asegura tanto la divergencia como la estabilidad de las preferencias programáticas de los partidos políticos; lo cual permite una vinculación con la ciudadanía de la misma índole.

En este sentido, la permanencia y el aumento consecuente en los niveles de identificación política del partido en el gobierno se finca en los resultados positivos de la política macroeconómica y sobre todo sobre la base de que en el desempeño del gobierno no se incurra en distingos o en beneficios particulares en empleo, salud, renta, etc.

Los requisitos políticos, los cuales han sido objeto de comprobación empírica, que hacen posible que estas condiciones afecten las preferencias electorales de los partidos y consecuentemente, como lo demostró Fiorina, los niveles de partidismo son:

- 1) El individuo debe ser capaz de imputar al partido de gobierno la responsabilidad de la situación económica que atraviesa el país
- 2) la oposición ha de tener una posibilidad real de alcanzar el poder y
- 3) la distancia ideológica entre los partidos debe ser reducida para que cada uno pueda erigirse como una alternativa creíble de gobierno (Lago, 2005).

4.1 La Dimensión de la Receptividad de la Representación Programática

La dimensión de la receptividad de la representación programática, que en sí puede tipificarse como el tipo de representación ideal para una democracia, implica la forma en que las señales emitidas por los ciudadanos se transformen en políticas adoptadas por el gobierno.

Los partidos políticos agregan las demandas ciudadanas, transforman sus intereses en entradas o inputs para el sistema político, en caso de llegar al gobierno las materializan en outputs o productos en forma de políticas específicas (Knutsen y Scarborough, 1995).

De esta forma los procesos electorales son la condición fundamental para que se efectúe este proceso de selección de programas y a los partidos que los ostentan (Müller, 2000). Se trata en primera instancia de realizar un juicio prospectivo, lo que Fearon (1999), ha denominado como la selección de buenos tipos; como el propio Fearon lo enuncia “no hay ninguna razón lógica por la cual las elecciones deban ser entendidas sólo como parte de una relación de control o agencia. Por el contrario se pueden entender también como una forma de seleccionar u honrar a los mejores o más distinguidos”(1999:57)

Por otra parte, una de las fuertes críticas que se le hace a este modelo de representación es su incapacidad de agregar y ser receptivo a nuevas demandas sociales tales como problemas medioambientales, mayor participación ciudadana, así como también el reconocimiento de valores distintos a los tradicionales: postmaterialistas, de minorías étnicas, raciales o de género etc; demandas y valores que conllevan una formación distinta de las alineaciones partidistas (Dalton, Flanagan y Beck, 1984).

Para Von Beyme (1996) esto es producto de profundos cambios sociales que han complejizado el proceso de agregación de preferencias dado que la ciudadanía en tanto electorado se ha vuelto más heterogéneo y por lo tanto ha diversificado sus demandas.

No obstante, si las nuevas demandas son lo suficientemente populares entran a formar parte de las consideraciones estratégicas de los partidos tradicionales (Montero y Torcal, 1994 y Müller –Rommel, 1985); lo cual daría lugar a un proceso

de realineamiento en donde los partidos identificados con la izquierda intentarían o de hecho se apropian como parte de su agenda programática las nuevas demandas y valores post-materialistas y los partidos de derecha o conservadores se apegan a propuestas más tradicionales.

Al respecto Kitschelt (1994 y 2004), ha señalado que en términos construcción de una identificación político –partidaria, los partidos se ven paulatinamente obligados a producir coaliciones políticas en un entorno económico, social y cultural totalmente heterogéneo, se ven obligados a manejar una variedad más que una homogeneidad de electores potenciales.

En contraparte, la ausencia de un mandato imperativo y la representación revocable (Manin, 1998), han creado paradójicamente, en algunos contextos, las condiciones institucionales necesarias para la emergencia de partidos “catch all” o catch-all parties en su acepción en inglés, esto ha sido presentado como una debilidad de la dimensión de la receptividad, dado que no existe un compromiso concreto hacia una agregación específica de demandas, no obstante para autores como Kitschelt (2000) y Puhle (2002), la presencia de partidos des-ideologizados y poco programáticos, motiva un constante sondeo de las preferencias de los ciudadanos con lo cual la receptividad se fortalece.

La conformación/construcción de identidades por parte de los partidos, en la dimensión de la receptividad, tiene que lidiar con el hecho de que estando en el gobierno los partidos no tengan incentivos para llevar a cabo el mandato asumido en las urnas (Stokes, 2001).

Al respecto algunos autores mantienen que una verdadera agregación de demandas y por lo tanto una verdadera receptividad deviene cuando los partidos en el gobierno se apegan con totalidad al mandato al que se comprometieron con determinada oferta programática (Gargarella, 1995; Müller, 2000), si al llegar al gobierno el cumplimiento de la oferta inicial compromete la estabilidad y el desarrollo político económico, el mandato puede ser aún cumplimentado si esta situación se justifica con una información adecuada (Manin, Przeworski y Stokes, 1999).

Si este fuera el caso, la dimensión de receptividad de la representación democrática pierde fuerza, no existe ningún mecanismo institucional que asegure la instrumentación de las preferencias ciudadanas en políticas, tal y como el RPM postula.

Queda entonces la dimensión de la rendición de cuentas, en donde los resultados de una desviación del programa, del mandato, se ponen a consideración de los individuos, los cuales pueden dar un voto de confianza ratificando al gobierno en turno o castigarlo votando en contra (Ferejohn, 2002).

El incumplimiento del mandato no es problema para autores como Birch (1993), Riker (1982) y Sartori (1992), Friedman (1962), Hayek (1977), Huntington, Crozier y Watanuki (1975) la línea general de estos trabajos postula que una cantidad excesiva de demandas a ser tomadas en cuenta conduciría a la ineficacia y parálisis de las acciones de gobierno, si se espera que el gobernante cumpla cada una de las demandas ciudadanas, y en su totalidad su oferta programática se produce un *trade off* entre representación y eficiencia y responsabilidad del gobierno.

Por otra parte, se ha propuesto que una forma de fortalecer la dimensión de la receptividad en aras de dar mayor sustento a la formación de identidades y coaliciones políticas, es la de establecer una comunicación más directa con los individuos, abriendo nuevos cauces de participación ciudadana que permitan plantear iniciativas desde la base, realizar consultas periódicas e invitar a tomar parte en el diseño de los programas partidarios (Budge, 1996).

Esto conlleva un riesgo para los que defienden una concepción más cercana al método democrático- elitista postulado por Schumpeter (1942), para Sartori (1992) y Schattschneider (1942) los partidos deben ofrecer alternativas y programas claros, lo cual se consigue con un alto nivel de cohesión interna; para Strom (1990), una mayor diversificación de corrientes al interior de los partidos y mayor participación ciudadana conduce a una orientación excesiva de los partidos hacia las políticas, *policy – seeking parties*, en detrimento de partidos cuya meta principal sea la búsqueda de votos, a la Downs, *vote-seeking parties* o cargos públicos – *office seeking parties* -. Esto pone en peligro la correspondencia de las demandas ciudadanas con las propuestas de los partidos y su posterior traslado a políticas públicas (McKenzie, 1982).

El argumento en pro de una excesiva participación en la configuración de los programas se esgrime en el sentido de que los partidos deben ser receptivos a los votantes en general, y no a demandas particulares y/o activistas, de los cuales no se puede asegurar su representatividad. En suma una mayor democracia interna de los partidos y mayor participación ciudadana, pone en peligro desde la visión del modelo de Gobierno de Partido Responsable, la competitividad y una verdadera agregación y receptividad de las demandas ciudadanas.

4.2 La Dimensión de la Rendición de Cuentas

En el apartado anterior vimos distintas propuestas encaminadas a mejorar la receptividad y la agregación de las demandas ciudadanas con el objetivo de que los partidos en el gobierno las traduzcan en políticas concretas. Estas medidas se han visto también como los mecanismos necesarios para mejorar la rendición de cuentas – accountability – la cual implicaría un mayor involucramiento de los ciudadanos en la toma de decisiones y en el control de la implementación de las políticas públicas.

Todo ello, se argumenta, conduciría a un aumento en los niveles de confianza explícita o trust (Luhmann,1988), la cual se deposita en una persona o institución a la hora de tomar decisiones de riesgo, y traduciría en este caso en un aumento en los niveles de identificación con los partidos políticos, la confianza explícita conlleva también una relación de confianza implícita (confidence), hacia el sistema político en general, es decir si se instrumentaran estos mecanismos el voto expresaría una aquiescencia con el método democrático como la forma más adecuada para seleccionar a los gobernantes y de garantizar la democracia en un sentido amplio (Paramio, 1998).

Sin embargo, para otros autores estos mecanismos debilitan la rendición de cuentas al restarle responsabilidad a los partidos políticos por su desempeño, debilita su función como ejes de articulación del gobierno, de intereses y demandas, y sobre todo se debilita la atribución de responsabilidad por los resultados en la implementación de las políticas.

Se genera la paradoja de la responsabilidad compartida que limita la evaluación retrospectiva de los políticos en función de los resultados (Papadopoulos, 2003).

Como ya se ha mencionado, las elecciones funcionan como un mecanismo prospectivo que permite a los individuos conocer las distintas propuestas y programas de los partidos, y con ello evaluar el grado de receptividad que estos

tienen sobre los distintos problemas y demandas que posteriormente se transformarían en políticas concretas.

Es evidente que las elecciones logran influir de forma prospectiva en las políticas posteriores de los partidos elegidos y de igual forma las políticas a implementar pueden pronosticarse a partir de las agendas temáticas que surgen de la competencia entre partidos (Klingemann, Hofferbert y Budge, 1994 y Maravall, 2003).

Desde nuestra perspectiva, los procesos electorales son el único punto de conexión entre los resultados de los representantes y las distintas sanciones que los ciudadanos pueden imponer (Manin, Przeworski y Stokes, 1999).

Si concebimos el ejercicio de representación como una relación de agencia, los partidos políticos en la dimensión de la rendición de cuentas son los intermediarios de la relación principal – agente, en este caso entre los ciudadanos y los representantes de gobierno:

Los partidos políticos facilitan a los ciudadanos una serie de mecanismos de control ex ante que reducen los problemas de agencia. Al disponer, entre sus funciones operativas del monopolio en la selección de candidatos a cargos públicos, ofrecen a los ciudadanos (el principal) un mecanismo de control ex ante sobre los representantes (el agente) capaz de reducir los problemas derivados de la selección adversa que se originan cuando el principal no dispone de la información suficiente para conocer las preferencias del agente al que se elige. Los partidos, al integrar a los candidatos en sus listas electorales, ceden a estos candidatos la etiqueta del partido proporcionando a los votantes una especie de atajo cognitivo del que se pueden valer para acertar en las preferencias de los representantes y en las políticas que estos desarrollarán” (Strom, 2003, 61; Downs, 1957; Wittman, 1995 y Mestre 2007)

Pero sin duda lo más importante es que las elecciones son el vehículo principal que posibilita la evaluación directa de los ciudadanos hacia los partidos, el canal que expresa el sí o el no, la sobrevivencia o la expulsión del poder (Key, 1964: 544).

En este sentido, recuperando a Fiorina (1981: 6), las elecciones, más que indicar en qué dirección ha de moverse la sociedad, muestran la evaluación que los ciudadanos hacen de por dónde ha ido dicha sociedad.

A través del voto se llega a una fase final de un proceso de deliberación más amplio que se llevo a cabo entre distintos sectores: partidos, sindicatos, organizaciones, líderes, medios de comunicación etc. Que tuvo lugar en la dimensión de la receptividad, durante el período de agregación de demandas; por lo que aun

tomando esta etapa como de deliberación de las distintas alternativas que tiene el individuo, es través de la sanción electoral en que literalmente se toma partido.

En el proceso electoral los individuos acuden con preferencias moldeadas por el proceso político, por los partidos políticos principalmente, pero también deciden sobre la base de preferencias inducidas por sus creencias, sean estas de carácter técnico, modelos de relaciones causales entre políticas y resultados (Vanderberg y Buchanan, 1989), o creencias acerca de las creencias de otras personas, o también llamadas creencias de equilibrio (Przeworski, 2001).

En suma a través de la dimensión de la rendición de cuentas los individuos entablan un proceso de evaluación de las acciones del partido en el gobierno, si la evaluación es positiva la relación con la identidad partidista entraña por lo tanto una identificación con un conjunto de decisiones políticas y económicas tomadas durante el ejercicio de gobierno previo.

5. Clientelismo, Intercambio particularizado ó patronazgo: La formación del partidismo en democracias emergentes.

El modelo de gobierno de partido responsable, demuestra la importancia que adquiere la dimensión de la receptividad y la dimensión de la rendición de cuentas en la formación del partidismo, lo más importante es que la agencia política crea y recrea identidades políticas y sociales (Mainwaring y Torcal, 2001).

Sin embargo la forma en que se articulan estas dos dimensiones, no sólo determina diferencias en las políticas que se implementan sino también diferencias y repercusiones en el funcionamiento del régimen democrático y por ende en la formación del partidismo.

Los vínculos que se establecen entre partidos y ciudadanos durante el ejercicio de gobierno, la dimensión de reciprocidad o receptividad, incide directamente en los parámetros de evaluación que los individuos ponen a consideración durante la rendición de cuentas; esto constituye la clave para entender la forma en que el partidismo se construye o forma.

El estudio de la formación del partidismo se ha desarrollado en su mayoría bajo las premisas de representación/desempeño y competencia formuladas por el modelo de gobierno de partido responsable. De acuerdo a esta línea de investigación los gobiernos de partido en democracias consolidadas, presentan una gran diferencia entre sí respecto al amplio rango de políticas sociales y económicas (Castles, 1982; Esping-Andersen, 1990; Huber y Stephens, 2001; Klingemann, Hoffert y Budge, 1994).

En América Latina, la existencia de este modelo de representación-vinculación programática, ha sido rastreada desde distintas perspectivas, con los estudios de preferencias programáticas entre votantes y líderes políticos (Ruiz Rodríguez y García Montero, 2003) (Luna y Zechmeister 2005) (Álcantara, 2004, 2008) con los análisis de corte institucionalista (Mainwaring y Scully 1995), estudios institucionales y de opinión pública (Payne, 2003), estudios comparados de los niveles de institucionalización existente entre las realidades de Europa del Este, América Latina y democracias consolidadas (Torcal, 2005) y el análisis de Coppedge (1998) que centrado en las coyunturas críticas marcadas por el cambio

en el modelo económico, a partir de 1982 hasta 1990, habían afectado el perfil ideológico, y las formas de organización de los partidos políticos en América Latina; posibilitando divergencia programática entre los partidos denominados de derecha, que habrían apoyado las reformas orientadas al mercado y los partidos de izquierda o centro izquierda, que se opusieron a dichas medidas como la solución aducida para la crisis económica en el continente.

El común denominador en la discusión de la mayoría de estos trabajos gira principalmente en torno a las consecuencias, que los distintos diseños institucionales de una democracia tendrían en el formato del sistema de partidos, en el diseño de los sistemas electorales, y en general en la estructura de representación de intereses. Sin embargo, aún con la presencia de este cúmulo de trabajos, la existencia de una representación programática tal y como lo postula RPM en América Latina ha sido poco probable.

El RPM ha enfrentado serias limitantes para explicar la realidad de las democracias que emergieron principalmente durante la tercera ola de la democracia (Sartori, 1994); en donde la competencia y el desempeño del gobierno se hace predominantemente sobre la base de lo que se conoce como el *Patronage-based, party-voter linkage* (Kitschelt y Wilkinson, 2007), un modelo de representación basado en el intercambio particularizado o también denominado representación clientelar. En este modelo los vínculos entre partidos y ciudadanos se basan en incentivos materiales directos, focalizados en individuos específicos o pequeños grupos que de antemano se sabe son altamente receptivos, esencialmente por su grado de marginación y pobreza, a retribuir electoralmente y/o, como es el objetivo de esta tesis demostrar, con su adhesión al partido político que lo está beneficiando en su ejercicio de gobierno, con los recursos del Estado⁴.

En este contexto, la rendición de cuentas no se sobre la provisión de bienes colectivos como el crecimiento económico, empleo, estabilidad monetaria, seguridad social.

⁴ En este sentido tal y como lo enuncia Meneguello (1998: 27): "El Estado ha adquirido un papel creciente como elemento regulador de la vida y del funcionamiento de los partidos, y la experiencias de gobiernos vienen ampliando las bases de su desarrollo organizativo a través de los recursos políticos allí producidos". A través de su participación en el gobierno, los partidos optimizan la atención de los intereses y necesidades de grupos organizados, o enclaves sociales en particular.

Por el contrario en la rendición de cuentas clientelar, la evaluación que hacen los individuos se hace sobre el beneficio mutuo y el intercambio de apoyo a cambio de una retribución o transferencia de renta directa, o por el acceso a empleo y bienes y servicios de distinta índole.

Al respecto Guillermo V. Alonso nos dice: “La distribución programática interpela a los jubilados, a los desempleados, etc. La distribución clientelar, en cambio, no interpela a categorías abstractas y generales, sino que sólo busca la cooptación de aquellos votantes que probablemente responderán con apoyo político al otorgamiento personalizado de favores o bienes” (2007: 85).

El estudio de los vínculos clientelares o de patronaje se ha diversificado en distintas perspectivas de análisis: históricas, económicas, antropológicas y por supuesto politológicas, al respecto se pueden consultar los trabajos de Eisenstadt y Roniger (1984), Gay (1994), Graziano (1973 y 1976), Lemarchand (1972), Powell (1970), Strickon y Greenfield (1972), Weingrod (1968) y Wolf (1966).

Sin embargo, el que logra centrar el fenómeno desde el enfoque de la Ciencia Política, es Alex Weingrod (1968), para este autor estudiar el patronazgo o clientelismo conlleva analizar, cómo los líderes políticos utilizan las instituciones y recursos públicos para sus propios intereses; implementando intercambios a nivel individual o colectivo; una relación que implica focalizar recursos públicos hacia sectores específicos de la sociedad y la exclusión de otros.

De esta forma, el intercambio particularizado privilegia el uso de incentivos selectivos con base en la distribución de recursos públicos (Keefer, 2004).

En la arena electoral el patronaje/clientelismo, consiste en el apoyo brindado por medio del voto a cambio de posiciones en el sector público o la entrega de beneficios materiales. En este terreno, el intercambio particularizado se ha utilizado como una estrategia de movilización que difiere en gran medida de las formas de vinculación basadas únicamente en los programas de los partidos que se ponen en liza de competencia.

En virtud de la coexistencia en algunos contextos de la representación clientelar con la representación programática; últimamente se ha puesto en el centro del debate el rol que ha adquirido el clientelismo para el funcionamiento de la democracia.

Por una parte, se encuentran los trabajos que centrados en consideraciones normativas, ven esta forma de ejercer el gobierno como poco ética, con implicaciones anti-democráticas⁵ (Diamond, 1999 y Fox, 1994, Martz, 1997).

Desde esta perspectiva el clientelismo inhibe la institucionalización de la rendición de cuentas e impide los mecanismos de control del servicio público. Sin embargo, otros estudios enfatizan la relevancia que tienen los beneficios transaccionales y la distribución de recursos para establecer una vinculación entre distintos planos comunitarios: locales, regionales y nacionales.

En este mismo tenor se aduce que si bien el clientelismo mina los criterios de distribución universales, sus criterios de operación le permiten muchas veces a los gobiernos un mayor acercamiento a las necesidades locales o particulares de ciertos segmentos de la sociedad. (Ayse Günes-Ayata, 2000)

En este sentido, la discusión acerca de la relevancia del clientelismo adquirió mayor fuerza, por que se pensaba que con el curso de los distintos procesos de democratización que se estaban llevando a cabo en Europa del Este y la mayoría de los países de América Latina, era un fenómeno tendiente a desaparecer; se pensaba que este tipo de relaciones eran consustanciales a sociedades pre-modernas, agrarias o a regímenes autoritarios o con escasos espacios de participación política. Con el tiempo se evidenció que este esquema de representación pervivía y que el intercambio de puestos en el gobierno, contratos, servicios públicos y bienes materiales a cambio de apoyo político gozaba de cabal salud. Investigaciones como las de Vargas (1992), Fox (1994), Gay (1998) y Shefner (2001), mostraron la diversificación de los vínculos clientelares, su capacidad de adaptación a nuevos contextos políticos democráticos y económicos, su permanencia bajo formas modernizadas de provisión particularista principalmente de intercambio de votos por favores de distinta índole.

Sin embargo, la cuestión acerca de los factores que inducen a los políticos a adoptar una estrategia de patronaje/clientelismo muchas veces se ha visto

⁵ Dentro de las consecuencias del patronaje se incluyen: burocracias politizadas, corrupción, manipulación electoral, voto étnico, partidos políticos poco cohesionados, inequidad política, la consolidación de la ventaja del partido en el gobierno, sociedades civiles fragmentadas, atenuadas formas de ciudadanía y frágiles instituciones políticas (Fox 1994, Graziano 1976, Hagopian 1996, Wantchekon 2003)

obscurecida, debido a que la tendencia ha sido concentrarse más en las implicaciones éticas que conlleva el uso de los recursos públicos o por atribuir su existencia únicamente a las características que integran la composición social del electorado.

En América Latina en general y en México en particular; la revitalización del intercambio particularizado fue de la mano de un afán de los partidos políticos de adaptarse a un panorama social fragmentado por la permanencia de altos niveles de desigualdad y pobreza. En este sentido, a partir de distintas coyunturas críticas (Collier y Collier, 1991), que derivaron en cambios estructurales en los modos de producción y gestión económica, el colapso del desarrollismo y la consecuente implantación de las reformas estructurales orientadas al mercado, los partidos políticos en un contexto de incipiente desarrollo democrático, han tenido que redefinir sus estrategias de organización y vinculación en función de una presencia cada vez más fragmentada y heterogénea de grupos de interés, de la expansión del sector informal de la economía, y en general de grupos más segmentados alejados de las grandes divisorias sociales (campesinos, obreros, sectores medios). Lo anterior creó las condiciones para el predominio de la lógica de representación y acumulación política de naturaleza clientelar o también denominada de intercambio particularizado (Alonso, 2007; Hagopian, 2007; Kistschelt, 2007).

De esta manera, la distribución de bienes y servicios como objetos de intercambio para asegurar la lealtad y catalizar la movilización política (Gordin, 2006), fue la vía para que en gran parte de los gobiernos de América Latina, entre ellos México, pudieran implementarse las reformas orientadas al libre mercado; producto de las recomendaciones del llamado Consenso de Washington, tal y como lo señalan los trabajos de Levitsky (2003 y 2007), Roberts (1995), Weyland (1996), Stokes (2001), Burgess y Levitsky (2003), Magaloni (2005), Brusco, Nazareno y Stokes (2004).

Para Guillermo O'Donnell (1995), la posibilidad de una coexistencia entre neoliberalismo e intercambio particularizado, se debió en gran medida a un tipo de poliarquía que se configuró, en una primera etapa de los procesos de democratización, y que puede ser caracterizada como una democracia delegativa; la cual conlleva una fuerte concentración del poder en la figura del Ejecutivo, que

sustentado en un fuerte liderazgo y sin la presencia de fuertes contrapesos institucionales lo otorgó a la figura presidencial un alto grado de autonomía (Coppedge, 2003), este fue el caso del Perú de Alberto Fujimori y la Argentina de Carlos Menem durante los años noventa.

En este contexto, las adhesiones partidistas eran una expresión indirecta del poder, popularidad y legitimidad presidencial, en donde la democracia delegativa promovió vínculos de intercambio particularizado, principalmente a través de políticas sociales focalizadas cuyo objetivo fue el atemperar las externalidades que las reformas económicas orientadas al mercado estaban produciendo.

En suma, si bien la implementación de reformas y políticas económicas de desregulación estatal, privatización y manejo antiinflacionario, características del modelo neoliberal, dependió en ciertos contextos de un hiperpresidencialismo reformador (Paramio, 1998); la implementación de estas políticas no hubiera sido posible sin la conformación de vínculos clientelares; por lo que en la coexistencia de reformas neoliberales y movilización clientelar, los partidos políticos se convirtieron en simples vehículos de gestión o canalización de las demandas que los hizo inclinarse hacia una defensa de intereses sectoriales y no generales.

Bajo esta dinámica, durante la década de los noventa los países con fuertes liderazgos presidenciales presentaron márgenes de estabilidad aceptables en sus niveles de partidismo (Mercado, 1997); lo cual refleja la capacidad de los individuos de atribuir una responsabilidad partidaria de la gestión presidencial de sus políticas y estrategias de vinculación.

En este sentido estudios como los de Roberts (1995) , Weyland (1996), Levitsky (2001, 2003, 2007) señalaron : 1) la necesidad de los vínculos clientelares como una medida compensatoria en función de la implementación de las reformas de libre mercado en distintos países de América Latina, por lo que 2) a la par de que los partidos políticos se adaptaron a las transformaciones del modelo económico se dio un resurgimiento de las estrategias de movilización y vinculación particularista, que en el largo plazo han constituido la base sobre la cual han surgido nuevos esquemas de adhesión política.

En estudios como los de Auyero (2001), sobre las prácticas clientelistas del Peronismo, el de Schady (2000) sobre las tácticas asistencialistas de Fujimori previas a su reelección; los estudios de Magaloni (2005) y Magaloni, Díaz Cayeros y Estévez (2007) sobre México y la utilización electoral del Programa Nacional de Solidaridad, se abocaron en su análisis a mostrar como la utilización de los vínculos clientelares habrían coadyuvado en atemperar el efecto de los ajustes estructurales, en el sentido de constituirse en medidas compensatorias (De la Garza, 1996) que habrían permitido a los distintos partidos conservar o ampliar su base de apoyo.

Sin embargo, ante los evidentes y desalentadores resultados que tuvieron en términos de crecimiento económico las reformas estructurales, los partidos políticos y distintos movimientos personalistas de Izquierda, aprovecharon la oportunidad que el contexto de apertura y competencia democrática les ofrecía, para proponer una vuelta al Estado interventor o, al menos, de forma menos radical, una mayor presencia del Estado en la regulación económica.

Con el incremento de la competencia electoral y la alternancia política que a nivel nacional y subnacional se produjo en distintos países de América Latina, dio lugar a procesos que han permitido el cambio de orientación de las políticas existentes (Lowi, 1994), los partidos políticos entraron nuevamente en una dinámica de adaptación (Levitsky, 2003), en donde recuperan o activan nuevos anclajes con estrategias de representación que conllevan un intercambio particularizado de bienes y servicios sustentado en gran medida por el acceso a recursos estatales (Shefter, 1977).

Desde esta perspectiva, trabajos como el de David Hansen, Kirk Hawkins y Jason Seawright (2004) describen, por ejemplo, el funcionamiento de los Círculos Bolivarianos que le han permitido al Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, contar con una base de apoyo propia en los sectores sociales y urbanos. De igual forma, Levitsky (2003) da cuenta de cómo el Peronismo se transformó en lo que él denomina un Partido de Masas Populista, logrando por un lado instrumentar reformas de mercado y por otro construir, mediante una estrategia clientelar, una nueva base de apoyo con las clases bajas de la Provincia de Buenos Aires.

La conformación de nuevas bases de apoyo es el objetivo principal, independientemente de la política económica que se esté implementando, las redes

clientelares han sustentado su viabilidad en la acción estatal, sea a través de subsidios, esquemas de regulación o políticas sociales focalizadas.

Las nuevas estrategias de vinculación se alejan por completo del esquema corporativo, propio de las organizaciones sindicales, campesinas o del sector terciario. Por el contrario, lo que las caracteriza es su heterogeneidad; al respecto el trabajo de Kenneth Roberts (2006) demuestra que en el caso de las redes Chavistas, la constante fue su conformación por medio de una amalgama de grupos y movimientos sociales, así como miembros del sector informal y urbano.

De esta manera, en cualquiera de los dos casos: políticas de apertura económica o Estado interventor, son evidentes los efectos políticos que tiene la agregación de demandas, basada en una representación y ejercicio de gobierno clientelar, instrumentado principalmente a través de políticas sociales de distinto cuño; las cuales han sustentado su viabilidad a través de subsidios focalizados o universales de distinta índole.

Esto conduce a dilucidar, en torno a las implicaciones que los marcos de representación clientelar tienen para el funcionamiento de la democracia y la formación del partidismo.

Para Simonna Piattoni (2001) la política o las relaciones políticas entre gobierno y sociedad son inherentemente particularistas, lo que marca la diferencia es como los intereses particulares son promovidos y agregados. El clientelismo como forma particular de representación de receptividad de demandas y que crea condiciones específicas de rendición de cuentas es una de las muchas formas en que los intereses de distintos segmentos son promovidos, en muchos contextos esta forma de agregación de preferencias se ha constituido en la solución más racional, en el curso de acción que reporta mayores beneficios para los partidos políticos que lo llevan a cabo desde el gobierno, en una articulación particular de la democracia representativa.

En este sentido, para Corzo (2002) la relación de intercambio que se establece en el vínculo clientelar favorece una percepción favorable acerca de la eficacia en el cumplimiento del mandato de los representantes electos; el clientelismo promueve un acercamiento en las relaciones Estado – Sociedad (Günes – Ayata, A, 1994: 52), dado que el individuo que forma parte del vínculo se siente que forma parte de la

toma de decisiones. El intercambio que se establece en la relación clientelar da sentido a su relación política, al obtener una respuesta eficaz y concreta del Estado que satisface sus necesidades (Corzo, 2002: 16).

Las relaciones de intercambio clientelar si bien no sustituyen los canales de participación política formal como lo son las elecciones, tiene la capacidad de complementar las deficiencias de los canales de comunicación formalmente establecidos entre los ciudadanos y el aparato burocrático del Estado (Escobar, Cristina, 1994: 158)

Para Boissevan (1966), Alex Weingrod (1968: 377 – 400, y 1977: 41 – 52), Powell (1970: 411 – 425) y Silverman (1970: 327 – 339) el clientelismo es una forma de participación eficaz que le otorga la posibilidad al individuo de contar con un margen más amplio en la toma de decisiones más allá de la pura participación electoral; el argumento común en estos trabajos es que los individuos consideran su participación en las redes clientelares como una acción racional que los conduce a la consecución de sus demandas frente a los poderes públicos, el intercambio clientelar se enmarca dentro de la legitimidad de buscar aquello a que a uno le satisface (Corzo, 2002: 18).

En esta misma línea de aproximación al fenómeno para George Simmel en la medida en que todo lo que hacen las personas está movido por el propio interés de igual forma toda relación implica una reciprocidad, todas las relaciones humanas implican un intercambio, de esta forma el clientelismo político es visto por Simmel como “la acción recíproca más pura que compone la vida humana en la medida en que está ha de ganar sustancia y contenido” (Simmel, G., 1977:48)

Estas son algunas de las aristas argumentales acerca de la compatibilidad del intercambio particularizado con los principios de la democracia constitucional y el funcionamiento de los partidos políticos de masas, discusión que permanece constante desde diferentes perspectivas (Roniger, 2001).

Al respecto, recientemente el Banco Mundial reconoció la complejidad que entraña el fenómeno clientelar; resaltando que es particularmente fácil asumir un maniqueísmo en torno a su empleo y funcionamiento; dado que si bien se percibe al patronazgo como una transgresión de los principios de mérito y competencia que deben primar, por ejemplo, en el reclutamiento del servicio público; el Banco afirma que es

importante reconocer que muchos gobiernos a nivel mundial aceptan esta práctica como una forma de legitimación; como una forma de compartir una agenda común entre los individuos y el Estado⁶.

Esta dualidad, refleja la tensión aun existente en la mayoría de los regímenes democráticos; que han tenido que conciliar los principios de igualdad política con la existencia de profundos niveles de desigualdad económica (Velasco, 2006) y una profunda asimetría en la distribución del ingreso.

Esto explicaría, la proliferación que ha tenido el uso de las redes clientelares en contextos de ajuste macroeconómico, liberalización económica, privatización y reducción del Estado interventor; en estos contextos el clientelismo ha demostrado su capacidad de adaptación a la lógica del mercado; siendo usado para atemperar las desigualdades existentes, la estrategia clientelar ha demostrado ser perfectamente compatible con el modo de producción capitalista.

En este sentido, podría esperarse el mismo grado de flexibilidad en su utilización, pero ahora en un contexto en que la mayoría de los regímenes políticos de América Latina, han atravesado procesos de democratización de distinta naturaleza y envergadura; en donde las reformas económicas orientadas al mercado no han dado los resultados esperados pero se siguen manteniendo altas expectativas de un orden social más justo.

En este sentido, en la perspectiva de análisis que se propone en este trabajo y que va en consonancia con los trabajos de Hopkin (2001), Kitschelt (2000); Medina y Stokes (2002); Robinson y Verdier (2003), se considera que las estrategias de gobierno clientelares, son perfectamente compatibles con la democracia; compatibles con un régimen que permite, como ningún otro lo haría, la libertad suficiente a los partidos de construir su base de apoyo: focalizando la distribución de recursos hacia un segmento específico de la población.

Mientras que el intercambio por la vía de la representación programática es indirecto, en donde los partidos ofrecen un conjunto de políticas públicas a los individuos con la promesa de que serán implementadas ya en el gobierno, con un criterio universalista más allá de si votaron o no por el partido en el gobierno, cuyo

⁶ Jana Orac y Jeffrey Rinne, "Patronage". The World Bank Group, Governance and Public Sector Reform Site, Julio 24, 2000.

cumplimiento depende la reelección y el consecuente aumento en los niveles de identificación. En el intercambio particularizado el mecanismo de distribución es directo, existe un intercambio de votos por recursos materiales.

El esfuerzo de vinculación/organización se centra en canales, lazos y redes de intercambio que posibiliten la distribución particularista de recursos que en lugar de seguir criterios universalistas en la orientación de las políticas públicas se procede a un tipo de intercambio no mediado, esto genera una relación instrumental abiertamente partidista, ofrece a un sector en específico apoyo en forma de recursos, la mayoría de ellos de origen estatal, a cambio de votos o como veremos en este trabajo de lealtad e identidad partidista.

Sin embargo un punto en común que este tipo de intercambio tiene con el carácter programático, es que el tipo de racionalidad que subyace en las consideraciones retrospectivas es de naturaleza instrumental. Aún así, este tipo de evaluación adquiere mayor fuerza en un relación de intercambio dirigida a los potenciales partisanos del partido que ofrece los beneficios, en donde la identidad partidista, reformulando a Fiorina, es la suma continua de un desempeño particularista, que refleja tanto en la dimensión de receptividad políticas públicas que responden a servicios y favores concretos y personalizados como también una rendición de cuentas particularista.

Por lo tanto, que un gobierno de partido se incline por una estrategia programática o clientelar, se inserta perfecto en una concepción procedimental de la democracia⁷; en donde las consideraciones normativas quedan fuera:

La democracia no es un fin es un medio, por el cual las preferencias individuales tendientes a la maximización de la utilidad, posibilitan la elección entre distintas estrategias y/o plataformas de gobierno. En donde los individuos tienen la capacidad de sustituir una plataforma por otra, siempre con el objetivo que generen los resultados deseados; por lo que en la medida, en que exista alguna diferencia entre las plataformas de los partidos o entre las líneas generales de la política los individuos, en tanto votantes, con su elección “hacen constar que desean un lote de mercaderías políticas, y no otro” (Macpherson, 1997: 97)

⁷ Para una revisión crítica de esta concepción revisar: Duncan y Lukes (1963), Held (1996), Pateman (1970) y Miller (1983) por mencionar algunos.

En una democracia se parte del supuesto que los sujetos tienen necesidades y demandas muy diversas, que existe un grado alto de heterogeneidad que permite, en distintos contextos, se forme una mayoría que, en concordancia con la estrategia gubernamental, opta por una forma específica en la conducción del gobierno de acuerdo a sus preferencias específicas.